

Julio 19 de 1946

12ª REUNION — 11ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor JUAN HORTENSIO QUIJANO, vicepresidente de la Nación
y del doctor ERNESTO F. BAVIO, presidente provisional del Senado

Secretarios ad hoc: senadores doctores OSCAR TASCHERET y PABLO A. RAMELLA

SENADORES PRESENTES:

AMELOTTI, Osvaldo
ANTILLE, Armando G.
ARRIETA, Alfredo J. L.
AVENDANO, Arcadio
BASALDUA, Juan Carlos
BAVIO, Ernesto F.
BUSQUET, Alfredo
CRUZ, Luis
DURAND, Alberto
FIGUEIRAS, Demetrio
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
GÓMEZ HENRÍQUEZ, Samuel
HERRERA, Julio
LAZARO, Juan Fernando de
LORENZÓN, Ricardo Octavio
LUCO, Francisco R.
MARTÍNEZ, Ramón Linídor
MOLINARI, Diego Luis
RAMELLA, Pablo A.
SAADI, Vicente Leonides
SOLER, Lorenzo
SOSA LOYOLA, Gilberto
TANCO, Miguel A.
TASCHERET, Oscar
TEISAIRE, Alberto
VALLEJO, César

AUSENTE, CON AVISO:

ZERDA, Justiniano de la

AUSENTE, CON LICENCIA:

MATHUS HOYOS, Alejandro

SUMARIO

1.—Diplomas de los senadores electores por Catamarca. Despacho de la Comisión de Peticiones, aconsejando el rechazo del diploma del señor Bracamonte y la aceptación del presentado por el doctor Julio Herrera.

2.—Juramento e incorporación del senador Herrera.

3.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones oficiales.

II.—Constitución de comisiones.

4.—Proyecto de ley del senador Saadi sobre construcción de un hospital en Belén y de salas de primeros auxilios y consultorios polivalentes en las villas de Londres y Hualfín, provincia de Catamarca.

5.—Proyecto de ley del senador Saadi autorizando al Poder Ejecutivo a invertir la suma de \$ 1.000.000 m/n. para realizar, por intermedio de la Dirección Nacional del Agua, estudios en la provincia de Catamarca, a fin del mejor aprovechamiento de las aguas de sus ríos y arroyos.

6.—Proyecto de ley del senador Saadi autorizando al Poder Ejecutivo a invertir la suma de \$ 150.000 m/n. en la construcción del Hogar Santa Rosa, en la ciudad de Catamarca.

7.—Proyecto de ley del senador Soler sobre derechos de la mujer.

8.—Consideración del proyecto de ley de represión de trusts y monopolios, presentado por el senador Molinari. Se aprueba con modificaciones.

9.—A indicación del senador Gómez del Junco, se resuelve tratar en la sesión del miércoles el proyecto de ley sobre arrendamientos rurales.

10.—Consideración del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales aconsejando conceder permiso al senador Mathus Hoyos, para aceptar una condecoración extranjera. Se aprueba.

11.—Consideración del despacho de la Comisión de Negocios Constitucionales que aconseja cambiar de nombre al Instituto Nacional de Sordomudos. Se aprueba.

12.—A indicación del senador Molinari, se resuelve realizar en la sesión del miércoles próximo el sorteo relativo a la duración de los mandatos de los senadores.

13.—La Presidencia designa al senador Molinari para representar al Honorable Senado en la Comisión Nacional de Cultura.

14.—Apéndice:

Sancción del Honorable Senado.

—En Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de julio de 1946, siendo las 15 y 35, dice el

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

1

DIPLOMAS DE CATAMARCA

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Deseo plantear ante el honorable cuerpo una cuestión de privilegio relacionada con la impugnación de los diplomas de Catamarca.

Como hace tiempo que este asunto se encuentra en comisión, desearía saber si hay desecho.

Sr. Presidente. — Entiendo, señor senador, hay despacho y por tratarse de un cuestión de privilegio, debe considerarse en primer no.

Gómez Henríquez. — Pido la palabra.

Por presidente: a último momento, por vía del presidente de la Comisión de Petición y Poderes, doctor Mathus Hoyos, se recomendó ser su miembro informante en lo referente a los diplomas de los senadores electos por la provincia de Catamarca, que son los de los señores Juan Alberto Bracamonte y Julio Herrera.

Bien, señor presidente. Tras un detenido estudio de los antecedentes de los diplomas otorgados por la Legislatura de la provincia de Catamarca y de la exposición que hemos oído al señor Bracamonte en defensa de su diploma, la Comisión de Peticiones y Poderes, de acuerdo con su despacho, aconseja el rechazo de su diploma y la aprobación del correspondiente al doctor Julio Herrera, conforme a la buena y precisa doctrina del doctor Joaquín V. González, expresada en su *Manual de la Constitución Argentina*, de que las legislaturas tienen jurisdicción sobre el título del elegido hasta su incorporación al Honorable Senado.

Digo la buena y precisa doctrina del esclarecido constitucionalista porque en 1916, cuando actuaba como político en su calidad de miembro de este cuerpo, sostuvo otra tesis en la discusión del diploma del doctor Julio A. Roca, y por su actitud y aclaración hecha con posterior-

idad a la aceptación del diploma del senador electo por San Juan, doctor Angel Rojas, quien a la mañana era gobernador de su provincia y por la tarde, en estupenda concepción, senador nacional electo.

Monstruosidad moral, tan bien calificada en la sesión del 11 de agosto de 1892 por el senador Igarzábal cuando impugnó el diploma del senador electo por Mendoza, doctor Guinazú, quien igualmente había renunciado a la gobernación de la provincia para ser elegido senador nacional.

Las palabras del señor senador Igarzábal dicen textualmente: «Creo, además, haber demostrado que cuando una elección se produce en estas condiciones, cuando el elegido es un inhábil por la Constitución, el acto es como si no hubiera existido y aun la misma Legislatura ha podido darlo como no hecho, y proceder a nombrar otro senador. Supongo que sobre esto último no queda la menor duda, porque algún alcance debe tener el que en esas condiciones se ve por todos los autores o por todos los parlamentarios, como no reconocido.»

Pues bien, la doctrina constitucional del eminente maestro Joaquín V. González, que sostengo, concordante con la de otro ilustre comentarista, el doctor González Calderón, ha sido sostenida brillantemente en 1928 por mis ilustrados colegas, doctores Antille y Molinari. Y no puede ser de otra manera, porque la representación que inviste el senador —la autonomía de la provincia— desaparece si el órgano otorgante, que es la Legislatura, se la quita.

El Senado, en una palabra, es la asamblea de todas las provincias en su forma federativa, y no se puede lesionar esta tradición, como ocurriría si se cercenaran facultades que le son propias a las legislaturas de provincia, de origen limpio y honorable, como el de la actual Legislatura de Catamarca, integrada por miembros surgidos de las elecciones del 24 de febrero del corriente año, las más puras registradas en la historia política del país, y que tanta jerarquía moral nos ha brindado ante el mundo.

Al ser reemplazado el señor Bracamonte por el doctor Julio Herrera, han sido llenadas las formalidades constitucionales porque los actos se han realizado conforme a decretos del gobierno defacto, al cual la Suprema Corte de Justicia, en una acordada, le reconoce todos los poderes políticos necesarios y esenciales para el logro de sus fines.

Por otra parte, al señor Bracamonte no se le ha hecho ninguna impugnación que afecte a su personalidad moral, por lo cual nos hemos ajustado, estrictamente, a la doctrina misma.

En cuanto al senador electo, doctor Herrera, tampoco se le ha hecho impugnación de tal ca-

Art. 5º — Déjese sin efecto para la mujer las penalidades establecidas en el artículo 21 de la ley 11.336 de enrolamiento general de la Nación, y, en cambio, de esas penalidades se le aplicarán las siguientes: Toda mujer que llegada a los 18 años de edad, no se enrole será penada con mil pesos de multa, computables a privación de la libertad durante seis meses, que serán cumplidos donde y como el Poder Ejecutivo fije al reglamentar esta ley.

Art. 6º — Déjense sin efecto los artículos del Código Civil y las leyes que se opongan a ésta.

Art. 7º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a rentas generales hasta tanto se incluyan en el presupuesto general de la Nación.

Art. 8º — Comuníquese, etc.

Lorenzo Soler.

—A la Comisión de Negocios Constitucionales.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

El proyecto que acabo de presentar, aunque tiene solamente la firma del senador que habla, lleva implícita la de todos los señores senadores de la Nación, cuya opinión es concordante con las aspiraciones del Poder Ejecutivo, traducidas en el mensaje presidencial, en el sentido de conceder a las mujeres los mismos derechos que tienen los hombres en nuestro país.

No me voy a extender en consideraciones. Dejo los argumentos que correspondan para cuando el respectivo despacho de comisión sea considerado por la Honorable Cámara. En esta oportunidad deseo tan sólo expresar breves conceptos para fundamentar la necesidad de que la mitad de los habitantes de la República Argentina, los del sexo femenino, se encuentre igualada a la otra mitad.

Por un anacronismo y quizá por la poca evolución de nuestras leyes políticas y sociales, la mujer ha estado relegada, hasta este momento, a una situación de subyugación y de predominio del hombre sobre ella. Pero ha llegado un momento tal, en el progreso de la humanidad, en que es necesario que a la mujer la coloquemos en igualdad de condiciones con el hombre.

Mi proyecto, no solamente iguala los derechos políticos, sino también los civiles, económicos, sociales y humanos. Y lo he hecho con el firme propósito de que desaparezca, de una vez por todas, la situación en que hasta ahora ha permanecido la mujer en la República Argentina; que, por desgracia, es la misma en que se encuentra en la mayoría de las otras naciones del mundo.

Se harán ciertas objeciones, quizá con alguna razón, porque habrá espíritus que temerán que, al colocar a la mujer en igualdad con el hombre, lleguemos a rozar la armonía de la convivencia en el seno íntimo del hogar; pero eso no me preocupa y creo que no pre-

ocupará tampoco a ninguno de los señores senadores, porque aspiramos a que la unión del hombre y de la mujer sea la resultante de la comprensión mutua que debe existir en la pareja humana.

8

REPRESION DE LOS TRUSTS Y MONOPOLIOS

Sr. Presidente. — De acuerdo con la resolución del Honorable Senado, corresponde tratar ahora, en particular, el proyecto referente a trusts y monopolios, votado, en general, en la sesión anterior.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

Solicito que se lea el decreto ley, artículo por artículo, a fin de ir tratando las modificaciones que se propongan a cada uno de ellos.

—Se lee:

Artículo 1º — Ratifícase y dase fuerza de ley al decreto 15.810/46, en la siguiente forma:

Artículo 1º — Declárase delito todo convenio, pacto, combinación, amalgama o fusión de capitales tendientes a establecer o sostener el monopolio y lucrar con él, en uno o más ramos de la producción del tráfico terrestre, aéreo, fluvial o marítimo o del comercio interior o exterior, en una localidad o en varias, o en todo el territorio nacional.

El delito se cometerá por el solo hecho de la formación del convenio, pacto, combinación, amalgama o fusión de capitales con la finalidad expresada en el párrafo que antecede.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

Deseo aclarar debidamente el alcance de este artículo, por lo que hago moción para que, a continuación de la palabra «monopolio», y entre paréntesis, se coloquen las siguientes: «trusts, holdings, cartels o cualquier otra denominación castellana o foránea».

Sr. Amelotti. — Yo me permitiría, señor presidente, proponer un agregado más, en virtud de que si bien en realidad existen algunas combinaciones que no significan precisamente un monopolio, también atentan contra la libre competencia, que es la base fundamental para la regulación del precio. Dicho agregado consistiría en las palabras «rings y corners»; a continuación de «cartels».

Sr. Molinari. — Apoyado.

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo con la modificación propuesta.

Sr. Secretario (Tascheret). — (Leyendo): «Artículo 1º — Ratifícase y dase fuerza de ley al decreto 15.810/46 en la siguiente forma: Artículo 1º — Declárase delito todo convenio, pacto, combinación, amalgama o fusión de capitales tendientes a establecer o sostener el monopolio (trusts, holdings, cartels, rings, corners o cual-

quier otra denominación castellana o foránea), y lucrar con él, en uno o más ramos de la producción del tráfico terrestre, aéreo, fluvial o marítimo o del comercio interior o exterior, en una localidad o en varias, o en todo el territorio nacional.»

El delito se cometerá por el solo hecho de la formación del convenio, pacto, combinación, amalgama o fusión de capitales con la finalidad expresada en el párrafo que antecede.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 19 con los agregados propuestos por los señores senadores.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Sosa Loyola. — Pido la palabra.

Antes de pasar a la consideración del artículo 29, en el que voy a proponer algunas modificaciones, quiero aclarar el sentido que va a tener esta ley en cuanto al carácter de los delitos económicos que castigará, y quiero también dejar expresa constancia de que la comisión que la ha estudiado aspirará a declarar que se tenga presente que los delitos que se castigan son de carácter formal, salvo poquísimas excepciones que se estudiarán más adelante. Conviene fijar expresamente esta circunstancia, porque el fracaso de la ley anterior, que vamos a reformar, como el fracaso de la ley Sherman, ha fincado en que se han admitido discusiones sobre la intención delictual o bien sobre la consumación de las consecuencias que se tuvieron en cuenta por los autores de estos delitos.

Como una acotación, conviene dejar sentado que el espíritu de esta ley es el de calificar estos delitos como formales, sin esperar a que se produzcan las consecuencias, porque el delito existe por la ejecución de ciertos actos que lo configuran como tal. Esta ha sido, además, la opinión de un autorizado curso de seminario e investigaciones científicas de la Universidad de La Plata, dirigido por el doctor Enrique Gil, sobre la ley 11.210, con sus antecedentes doctrinarios referentes, como digo, a la represión de la especulación y de los trusts.

Estos estudios han llegado a establecer lo siguiente, que me voy a permitir leer de la página 9 de la obra que acabo de citar: *El elemento intención, que se desprende de la excepción del artículo 29 de la ley 11.210, es de difícil comprobación; de allí que la ley en los casos en que es necesario tener en cuenta este elemento subjetivo, adopta el método de la presunción juris et de jure, o sea que sin admitir prueba en contrario, da como cierta su existencia.*

Además, en síntesis, llega esta investigación a sentar como principio esencial, que debe presumirse la intención delictuosa en la formación del trust. Por eso es que al pasar a la consideración del artículo 29 voy a proponer algunas

modificaciones, máxime si se tiene en cuenta que en el Código Penal, por ejemplo, el artículo 210, cuando castiga el delito de banda, que es muy parecido a los delitos que nosotros vamos a castigar mediante esta ley, dice: «Será reprimido con reclusión o prisión de un mes a cinco años el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas, destinadas a cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.»

Hay una gran semejanza, señor presidente, con los monopolios, que son verdaderas bandas organizadas para destruir y atentar contra la economía privada.

Reservándome las enmiendas que voy a proponer al considerar el artículo 29, quiero dejar sentado que éste es el pensamiento central que informó a la comisión que estudió este aspecto de la ley.

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo 29.

—Se lee;

Artículo 29 — Considéranse actos de monopolio o tendientes a él y punibles por la ley, los que sin importar un progreso técnico ni un progreso económico, aumenten arbitrariamente las propias ganancias de quien o quienes los ejecuten sin proporción con el capital, efectivamente empleado y los que dificulten o se propongan dificultar a otras personas, vivientes o jurídicas, la libre concurrencia en la producción o en el comercio interno o en el comercio exterior y especialmente:

- a) La destrucción intencional de productos en cualquier forma y en cualquier grado de su elaboración o producción, por sus productores, empresarios o comerciantes, con el propósito de determinar el alza de los precios y sin que sus autores puedan ampararse en disposiciones gubernativas que la autoricen;
- b) El abandono de cultivos o plantaciones existentes, el paro de fábricas, usinas, canteras, minas o cualquier otro establecimiento de producción, cuando ese abandono o paro sean determinados por indemnizaciones pagadas a los propietarios;
- c) Los convenios para repartirse una localidad, región, provincia o cualquier parte del territorio como mercados exclusivos de venta o compra para determinados productos y en beneficio de determinadas personas o sociedades con el propósito de suprimir la competencia y producir el alza o la baja de los precios o imponer un precio fijo de compra o venta;
- d) Los convenios o pactos para limitar la producción o elaboración de uno o varios artículos con el propósito que se expresa en el artículo 1º de la presente;
- e) La venta de cosas o la prestación de servicios deliberada y sostenida por debajo del precio de costo, no tratándose de artículos deteriorados o en liquidación, siempre que tengan por objeto impedir la libre concurrencia;

- f) Los conventos que exijan del comprador no comprar de otro vendedor;
- g) Los convenios que impongan al revendedor un precio determinado de reventa;
- h) Que la misma persona sea director de diferentes compañías o sociedades, o administrador o gerente de una y director de otra u otras del mismo ramo, cuando esta vinculación pueda conducir al monopolio o a la restricción de la competencia;
- i) Toda garantía directa o indirecta que presten industriales u obreros a comerciantes por mercaderías suministradas a obreros dependientes de aquéllos.

Sr. Sosa Loyola. — Pido la palabra.

Consecuente con lo que expresé hace un momento, propongo que en el inciso a) se suprima la palabra «intencional», quedando el inciso en esta forma: «La destrucción de productos en cualquier forma y en cualquier grado de su elaboración o producción, por sus productores empresarios o comerciantes, con el propósito de determinar el alza de los precios y sin que sus autores puedan ampararse en disposiciones gubernativas que lo autoricen.»

Vuelvo a decir que debemos, para el mejor logro de la ley y su aplicación práctica —ya que como la definió el señor senador por la Capital, ésta deberá ser una ley con garras y con dientes, para que no escapen los delincuentes de la economía en los vericuetos de la interpretación de la ley ni en las fluctuaciones de la jurisprudencia, ni en los conatos de pruebas de toda clase, que son subterfugios tan bien organizados, por las compañías que cometen estos delitos—, suprimir esa palabra *intencional*, para que se encuadre la ley dentro de la tónica general que queremos darle, configurando el carácter formal de los delitos llamados de monopolio.

—Apoyado.

Sr. Sosa Loyola. — En igual sentido, señor presidente, propongo que en el inciso e) se suprima la palabra «deliberada».

—Apoyado.

Sr. Sosa Loyola. — Propongo también, señor presidente, que en el inciso h), después de las palabras «que la misma persona» se agregue «o entidad social».

Conocemos sobradamente, señor presidente, las maniobras y las mil artimañas de que se valen las entidades comerciales o entidades sociales, de carácter monopolista, para reunir en sus manos diversas actividades o para dirigirlas en este tenebroso proceso de la trustificación.

Por eso, para que no haya en la aplicación de esta ley ningún subterfugio que pueda permitir la salvación de las poderosas entidades comerciales que dirigen y que practican el trust en una forma tan alarmante y peligrosa en todo el país, solicito que se agreguen estas palabras: «o entidad social».

—Apoyado.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Comprendo el propósito que persigue esta enmienda al inciso a) del artículo 2º, presentada por el señor senador que acaba de hacer uso de la palabra, pero parecería que si no se modificara más adelante, suprimiendo también las palabras: «... con el propósito de», que se refieren «a determinar el alza» siempre habría la necesidad de la prueba de este propósito, de lo que resultaría que el delito no sería formal ni surgiría del acto mismo delictuoso. Tendría necesidad de prueba de dicho propósito, según quedaría en la ley si no se pusiera la aclaración que yo propongo en este momento para que, en realidad, no haya cuestiones, para que el delito sea formal en sí, para que sea delito la comisión del hecho de destruir productos. Tendrían que suprimirse las palabras que acabo de mencionar, substituyéndolas por las siguientes: «... destrucción de productos, etcétera, *tendiendo a determinar el alza*». No prohibir el propósito, o la intención, o la finalidad, sino, simplemente, la tendencia a alzar el precio.

Si el señor senador que hace la observación aceptara, con la redacción que yo propongo, quedaría más claro.

Sr. Molinari. — Cobra más fuerza el artículo. Ahora, sería conveniente que se leyera nuevamente todo el artículo, para ver cómo ha quedado.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — El artículo con las modificaciones quedaría redactado en la siguiente forma:

Artículo 2º — Considéranse actos de monopolio o tendientes a él y punibles por la ley, los que sin importar un progreso técnico ni un progreso económico, aumenten arbitrariamente las propias ganancias de quien o quienes los ejecuten sin proporción con el capital efectivamente empleado y los que dificulten o se propongan dificultar a otras personas, vivientes o jurídicas, la libre concurrencia en la producción o en el comercio interno o en el comercio exterior, y especialmente:

- a) La destrucción de productos en cualquier forma y en cualquier grado de su elaboración o producción, por sus productores, empresarios o comerciantes, *tendiendo a determinar el alza de los precios y sin que sus autores puedan ampararse en disposiciones gubernativas que la autoricen;*

- b) El abandono de cultivos o plantaciones existentes, el paro de fábricas, usinas, canteras, minas o cualquier otro establecimiento de producción, cuando ese abandono o paro sean determinados por indemnizaciones pagadas a los propietarios;
- c) Los convenios para repartirse una localidad, región, provincia o cualquier parte del territorio como mercados exclusivos de venta o compra para determinados productos y en beneficio de determinadas personas o sociedades con el propósito de suprimir la competencia y producir el alza o la baja de los precios o imponer un precio fijo de compra o venta;
- d) Los convenios o pactos para limitar la producción o elaboración de uno o varios artículos con el propósito que se expresa en el artículo 1º de la presente;
- e) La venta de cosas o la prestación de servicios sostenida por debajo del precio de costo, no tratándose de artículos deteriorados o en liquidación, siempre que tengan por objeto impedir la libre concurrencia;
- f) Los convenios que exijan del comprador no comprar de otro vendedor;
- g) Los convenios que impongan al revendedor un precio determinado de reventa;
- h) Que la misma persona o entidad social sea director de diferentes compañías o sociedades, o administrador o gerente de una y director de otra u otras del mismo ramo, cuando esta vinculación pueda conducir al monopolio o a la restricción de la competencia;
- i) Toda garantía directa o indirecta que presten industriales u obreros a comerciantes por mercaderías suministradas a obreros dependientes de aquéllos.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 2º con los agregados propuestos por los señores senadores.

—Se vota y resulta afirmativa por unanimidad.

—Se lee:

Artículo 3º — Cuando los delitos que se penan en esta ley hubieran sido cometidos por el director, administrador, gerente o empleado de una persona jurídica, asociación o sociedad, en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores, se podrá someter a proceso a la entidad social bajo cuyo amparo o en cuyo beneficio se hubiese cometido el delito. En tal caso la entidad social tendrá la actuación que corresponde a los procesados por intermedio de un representante legal.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Deseaba, señor presidente, que el miembro informante de la comisión explique si es intención del artículo someter a proceso a la entidad social o a los miembros que componen la entidad, a los directores de cualquier entidad.

Sr. Sosa Loyola. — Debe ser a los directores.

Sr. Antille. — Entiendo que debe ser a los directores.

Sr. Molinari. — Como está redactado, el punto de partida se encuentra en el proyecto del Poder Ejecutivo. Correspondería decir: a los directores de la entidad social donde se presume cometido el delito. La entidad social tiene otras penas que son: la disolución, la multa. En el caso de pena corporal, solamente los directores pueden ser objeto de ella.

Sr. Antille. — Hago indicación que se complementa el pensamiento diciendo: a los directores de la entidad social.

Sr. Ramella. — En esta materia en la que, como hemos dicho en otras oportunidades, se aplica un derecho nuevo, lo que se quiere es establecer una penalidad para la entidad, para la sociedad, en contra del concepto antiguo que las sociedades no podían ser acusadas criminalmente. A la entidad no le puede ser aplicada la pena de prisión, sino la de disolución, clausura, etcétera, penas que son de carácter penal, no de simple carácter administrativo y que por lo tanto obligan a la sociedad como tal, y que tienen que hacer responsable a la entidad.

Si no se somete a proceso a las entidades, ¿qué ocurre? Que cuando un director es procesado, se substituye por otro, y los delitos se siguen cometiendo de la misma manera. Está perfectamente bien el proyecto del Poder Ejecutivo.

Yo, todavía, introduciría una modificación que es correlativa a lo que se hizo en la ley de abastecimientos, diciendo se someterá a proceso en vez de se podrá someter.

Habiendo la presunción de la comisión de un delito, la entidad tiene que ser sometida a proceso; no puede estar sujeta a la voluntad de la autoridad administrativa o del juez. Creo que el pensamiento del artículo, tal como está, es perfectamente claro y debe mantenerse.

Sr. Antille. — Si la palabra «proceso» se refiere a cualquier actuación, aun administrativa, entonces se podría dejar como está. Pero yo entendía que el proceso se refiere al juicio criminal y, en ese caso, no se puede, sin duda, procesar —en ese sentido— a la entidad, sino a los miembros.

Me parece que podría aceptarse que se deje como está, y se agregara salvo los casos de pena corporal, como bien ha expresado el señor senador por la Capital. En ese caso, se mantendría el artículo, pero se haría la aclaración que en los casos de proceso por pena corporal, se siga el proceso contra los directores.

Sr. Molinari. — Está bien.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Pienso, señor presidente, que la cuestión planteada por el señor senador por Santa Fe que-

daría salvada al corregirse el artículo siguiente, o sea el artículo 4º, en el cual veo que se ha deslizado un error de carácter jurídico, pues al suprimirse la sanción de las penas paralelas, prisión o multa, para las personas físicas y reprimirlas exclusivamente con prisión, sancionando con multa a la persona ideal, pero sin hacer solidaria esta sanción a las personas físicas que integran su directorio o actúan en representación, en la práctica fracasará.

En efecto, cuando una infracción grave se haya cometido en beneficio de una persona ideal de una muy limitada responsabilidad patrimonial, resulta muy fácil, como se comprende, crear primero una persona jurídica con escaso patrimonio y cometer, después, por su intermedio, maniobras punibles, y cuando sea difícil determinar una persona física personalmente responsable, resultará que cualquier multa que sea superior al escasísimo capital social, no podría jamás hacerse efectiva.

Y así acontece en casi todos los casos, pues quienes cometen estos delitos económicos premeditan todas sus consecuencias y trampas posibles. Por eso, es que creo que al salvar la omisión consignada en el artículo 4º, la pena de multa, al mismo tiempo, no gozaría del beneficio de la condena condicional que, de acuerdo con el artículo 26 del Código Penal, comprende a todas las multas, cualquiera sea su monto. Esa omisión, que sería muy grave provocaría el total fracaso de esa disposición. En efecto, creo que debemos hacer una corrección al artículo siguiente, con lo cual quedarían perfectamente aclarados el espíritu y la letra de la ley, al mismo tiempo que aseguraríamos su cumplimiento, porque de otra manera dejándola tal cual está redactada esta disposición y la subsiguiente del artículo 4º, sus sanciones serían ilusorias.

Pero considerando que tratamos la ley básica, mucho más importante que las sancionadas en sesiones anteriores, creo que debemos asegurar el total éxito a su cumplimiento para que no nos ocurra lo que ha sucedido con la ley anterior, que resultó ineficaz e innocua.

Por eso es que creo que la observación del señor senador, muy atendible, debemos de tenerla en cuenta en la redacción del artículo 4º.

Sr. Molinari. — ¿Cómo quedaría redactado el artículo 3º?

Sr. Saadi. — Como está.

Sr. Molinari. — Con la única modificación que en lugar de decirse *podrá someter*, se introduzca el carácter imperativo: *se someterá a proceso*.

Sr. Presidente. — Se leerá el artículo con las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (*Leyendo*): «Artículo 3º — Cuando los delitos que se penan en esta ley, hubieran sido cometidos por el director, administrador, gerente o empleado de una persona jurídica, asociación o sociedad, en el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores, se someterá a proceso a la entidad social bajo cuyo amparo o en cuyo beneficio se hubiese cometido el delito. En tal caso la entidad social tendrá la actuación que corresponde a los procesados por intermedio de un representante legal.»

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 4º — Los que violen lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de esta ley y los que tomen parte en los actos que ella prohíbe en carácter de banqueros, serán penados con prisión de uno a seis años, cuando sean personas vivientes, y multa de \$ 2,000 a \$ 1,000,000, cuando sean personas jurídicas, asociaciones o sociedades. Si los hechos prohibidos por esta ley se hubieran cometido por empresas cuyas actividades afecten directamente a la defensa nacional, o hallándose la Nación en estado de guerra, el máximo de las sanciones se elevará el doble.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

En este artículo habría que introducir a mi criterio, dos modificaciones: la primera, relacionada con la solidaridad de la pena de carácter corporal a los directores de las personas jurídicas, asociaciones o sociedades; segundo, al final del artículo, habría que agregar también que estas penas no podrán gozar de los beneficios de la condena de ejecución condicional.

Sr. Molinari. — Muy bien. ¿Cómo quedaría redactado el artículo según su proposición?

Sr. Saadi. — En esta forma: Artículo 4º — Los que violen lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de esta ley y los que tomen parte en los actos que ella prohíbe en carácter de banqueros, serán penados con prisión de 1 a 6 años, cuando sean personas vivientes y multa de \$ 2,000 a \$ 1,000,000 cuando sean personas jurídicas, asociaciones o sociedades, y sus directores serán a su vez pasibles de la misma pena establecida para las personas de existencia visible. Continuar el artículo en la forma como está y al final agregar: *Estas penas no podrán acordarse con los beneficios de la condena de ejecución condicional.*

Sr. Amelotti. — Pido la palabra.

Entiendo, señor presidente, que correspondería en estas circunstancias hacer una aclaración, por cuanto esta ley persigue un propósito de fondo, que es el de impedir el monopolio con la trustificación de la producción. Al decir mono-

polio, debemos sobrentender que se trata de la dirección por una sola persona en la venta o producción de determinados productos.

Hay un aspecto del monopolio, que es el monopolio político, que yo desearía se tuviera especialmente en cuenta a los efectos de evitar un confucionismo que podría traer aparejado motivos para litigar. Dentro del monopolio político, existiría el monopolio fiscal y el monopolio social; dentro del monopolio fiscal podría existir aquella centralización en que el Estado va monopolizando un determinado producto para allegar recursos tendientes a un fin cualquiera, y dentro del monopolio social tenemos, por ejemplo, el caso de Correos y Telecomunicaciones y muchos otros aspectos de nuestra vida, que también significan un monopolio, en los que no existe la libre concurrencia ni se da motivo a competencia.

Entiendo, señor presidente, que como nuestro país, precisamente, se destaca por su grandiosidad y sus riquezas naturales, y que como bien ha dicho alguien su progreso dependía del oro del extranjero, del libro francés y del brazo de los inmigrantes que elaboraban su grandeza; por ello debemos procurar que esta ley no signifique en ningún momento un motivo para obstaculizar lo que el Estado considera necesario conceder. Así, por ejemplo, hemos visto que en ciertas circunstancias el Estado ha tenido necesidad de regular ciertas producciones o de hacerse cargo de ellas, como en la fijación del precio de los cereales. Al fijar el precio de los cereales, también evita la libre concurrencia y al evitarla, la consecuencia es que no puede haber regulación de precios, lo que significa a su vez un monopolio por parte del Estado. Al efectuar esto, el Estado lo ha hecho con el fin de poder —al cobrar una determinada cantidad para la exportación— obtener recursos suficientes para entregar ese producto al consumo interno a un nivel inferior, cubriendo las diferencias con los aportes que había obtenido. Eso significa también una forma de monopolio y habría un sinnúmero de puntos que yo quisiera que quedaran perfectamente aclarados, que no deben estar comprendidos dentro de la finalidad de esta ley, entre ellos, el monopolio que podríamos llamar político o de necesidad nacional.

Sr. Tanco. — Pido la palabra.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — ¿Me permite el señor senador? El señor senador por Jujuy ha solicitado la palabra.

Sr. Tanco. — Voy a formular algunas objeciones que pensé expresar antes de ahora, al tratarse los incisos a) y b) del artículo 2º, pero desgraciadamente, el señor presidente no percibió que yo solicité la palabra.

Sr. Presidente. — Excúseme el señor senador; no lo he advertido.

Sr. Tanco. — La intervención del Estado en muchos momentos y circunstancias de la vida económica del país ha traído como consecuencia fortalecer los trusts. Los trusts que son hechos en combinación con el Estado, son los más peligrosos y los que menos pueden atacarse porque se ven perfectamente amparados.

En las provincias de Jujuy y Salta se han constituido varios trusts con evidente perjuicio para el país; entre ellos, el del azufre. Voy a dar algunos datos referentes a este trust, para luego ocuparme del trust del bórax.

La Compañía Azufrera Argentina entró a formar parte de la Sociedad Mixta Industrias Químicas, en 1942, en la época de la presidencia del doctor Castillo.

El país tiene una producción máxima de azufre de 10.000 toneladas. Eso no obstante, la Secretaría de Industria y Comercio limitó a 24.000 toneladas la importación anual de azufre.

El precio del azufre norteamericano, CIF Buenos Aires, no alcanza a 100 pesos por tonelada. El nacional, en cambio, se vende a 330 pesos. El chileno, elaborado en la misma zona y por el mismo método del autoclave, se coteja CIF Buenos Aires a 160 pesos la tonelada.

El azufre necesario para el estado actual de la industria argentina y para la lucha contra las plagas alcanzaría a 50.000 toneladas anuales. Eso no obstante, la Secretaría de Industria y Comercio sólo permite la importación de 24.000 toneladas anuales, obligando a comprar un 40 por ciento de azufre nacional, que representará 10.000 toneladas anuales de la producción máxima de Socompa.

De tal modo, el consumo de azufre queda oficialmente restringido a 34.000 toneladas anuales, perjudicando a la industria transformadora, a la agricultura y a la ganadería.

En la agricultura y la ganadería es ahora mayor el consumo de plaguicidas a base de azufre, por el mayor valor de la producción y por el progreso de la técnica rural.

La restricción del consumo favorece a importadores de productos derivados del azufre que se elaboraban en el país y que hoy no pueden fabricarse por escasez y carestía de la materia prima. (El azufre nacional se vende a 330 pesos por tonelada.) Los productos derivados son, además del ácido sulfúrico, toda la línea de sulfatos, sulfuros, sulfitos, etcétera.

El consumo de anteguerra era de 25.000 toneladas anuales. Hoy es necesario el doble.

Hay un principio del progreso de un país, que dice que él se mide por el consumo de ácido sulfúrico.

Además de lo que acabo de exponer, estos privilegiados del azufre han conseguido del gobierno nacional de aquellas épocas un decreto reservando todo el azufre del país para la Nación. Hoy en día no se descubren minas de azufre; el que las descubre las oculta, esperando que exista otra vez la libre competencia para ese artículo.

Con el bórax ocurre algo similar. Mi provincia tiene más de 50.000 hectáreas de bórax que no se explotan, paralizando el trabajo de innumerables obreros y favoreciendo a las industrias del Pacífico, con grave perjuicio para los intereses de la Nación. La Compañía Argentina de Bórax se fundó en 1938, al mismo tiempo que la Compañía Azufrera Argentina. En ambas figuraban los García Pinto. En la de boratos figuraba como director don Adriano Taurel, hoy fallecido, hermano político del ingeniero Escurra, entonces director general de Minas de la Nación.

La Compañía Argentina de Boratos pidió más de un centenar de cateos, de 2.000 hectáreas cada uno —imagínese, señor presidente, lo que eso representa—, para minerales de primera y segunda categoría, excluidos el petróleo y el borato, que entonces estaban bajo reserva.

Luego de concedidos esos cateos se dictó, en 1938 ó 1939 —ministerio de José Padilla—, un decreto dejando sin efecto la reserva del borato. Inmediatamente, los señores García Pinto, en nombre de la Compañía Argentina de Boratos, solicitaron se incluyera el borato en los cateos concedidos. Se hizo lugar.

Al trust del borato conocido por La Internacional se le calculan de 150.000 a 200.000 hectáreas de minas de borato, registradas en el país, las cuales no producen nada. Los balances de la Cuevitas Trading Co., o sea La Internacional, acusan pérdida, porque en los gastos de explotación figuran los derechos mineros del millar, aproximadamente, de minas registradas.

La Compañía Argentina de Boratos y los señores García Pinto, enajenaron después las minas registradas de borato y los permisos de cateo a la Cuevitas Trading Co., conocida por La Internacional, filial de la Borato Consolidated, de Londres.

He hecho estas referencias, señor presidente, para demostrar que los gobiernos que han precedido al actual han sido los principales autores de los trusts del país; por intereses creados han violado la fórmula económicosocial, de la que hice mención en otra sesión.

Si se respetaran las fórmulas económicas no existirían los trusts; lo que da origen a ellos son las finanzas y el egoísmo humano. Hay una diferencia enorme entre la economía y las finanzas. La economía política es como el cálculo

infinitesimal o como el álgebra. La aritmética, fiel servidora, ejecuta lo que le manda su patrona, el álgebra. Con las finanzas ocurre todo lo contrario: es la mala servidora, es la enemiga de la economía política; se complace en destruir todo lo que ésta le ordena, y si por desgracia, como en los casos que acabo de citar, los gobiernos en lugar de velar por el perfecto equilibrio social, se complacen en desvirtuar, en destruir sus leyes, ha de ocurrir siempre lo que estamos viendo que pasa ahora. (*¡Muy bien!*)

Sr. Saadi. — Son dos modificaciones, que entrego al señor secretario para que se sirva leerlas.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (*Le-yendo*): «Los que violen lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de esta ley, y los que tomen parte en los actos que ella prohíbe en carácter de banqueros, serán penados con prisión de uno a seis años cuando sean personas vivientes, y sus directores a su vez, serán pasibles de las mismas condenas que las establecidas para las personas de existencia física.»

Sr. Saadi. — Solidariamente, ¿no?

Sr. Molinari. — Creo que el artículo dice así: «Los que violen lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de esta ley, y los que tomen parte en los actos que ella prohíbe en carácter de banqueros, serán penados con prisión de uno a seis años, cuando sean personas vivientes, y multa de 2.000 a 1.000.000 de pesos, cuando sean personas jurídicas, asociaciones o sociedades.» Y a continuación viene el agregado: «...y los directores, a su vez, serán pasibles de la misma condena que se establece para las personas de existencia física.»

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Iba a pedir a la comisión, que tuviera la gentileza de aceptar que se intercale, después de la conjunción y, la palabra también, de modo que quedaría así: ...y también los que tomen parte... De esa manera quedaría más claro y expeditivo el artículo.

Sr. Molinari. — Habría que agregar también lo que proponía el señor senador por Catamarca, en la última parte de este primer párrafo.

Propongo un agregado, ya que se trata de un artículo en que se están estableciendo las penas para reunir las a todas en un solo apartado. Ese agregado ya lo hemos votado con motivo de la ley de abastecimientos. Diría así: «Las personas que incurran en condena por haber cometido alguno de los delitos que se especifican en esta ley, concurrentemente serán pasibles: a) De inhabilitación perpetua para ejercitar sus derechos cívicos, si son ciudadanos argentinos nativos; b) De anulación de su carta de ciudadanía, y extrañamiento del país después de cumplida la condena, si son argentinos naturaliza-

dos; c) Del extrañamiento del país después de cumplida la condena, si fuesen extranjeros.»

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Solicitaría del señor senador por la Capital que ese agregado lo deje reservado para el caso de reincidencia. Es demasiado fuerte la condena que se aplica.

No es que pida al señor senador esto por el simple hecho de hacer una observación. De ninguna manera. Creo que debemos ser inflexibles, que debemos obrar con toda energía y dar a la ley los elementos necesarios para que se cumpla en toda su amplitud.

Pero, por una razón de carácter jurídico, por una razón de conocimiento y experiencia en la aplicación de las penas, es que creo que debemos graduarla. No sé qué pena podemos aplicar al que reincida, dado que ya se suprimen los beneficios de la condena de ejecución condicional.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

Al estudiar en la comisión el sistema de penas aplicable, no habíamos tomado en cuenta el agregado que ha propuesto el señor senador por Catamarca, de suprimir el beneficio de la condena de ejecución condicional. Nosotros queremos dar una ley que tenga dientes y garras. Esto es evidente, pero naturalmente en ese momento al no considerar esta situación especial que resulta de las modificaciones introducidas por el señor senador por Catamarca, modificamos la otra ley en el sentido de que no era aplicable la pena por reincidencia sino por la comisión simple del hecho, pero, de acuerdo con mis honorables colegas, no tenemos inconveniente en aceptar que así sea para la reincidencia. Pido que se lea el artículo como quedaría.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (*Leyendo*): «Artículo 4º — Los que violen lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de esta ley y también los que tomen parte en los actos que ella prohíbe, en carácter de banqueros, serán penados con prisión de 1 a 6 años, cuando sean personas vivientes y multa de \$ 2.000 a \$ 1.000.000 cuando sean personas jurídicas, asociaciones o sociedades, y los directores a su vez serán pasibles de la misma condena que las establecidas para las personas de existencia física solidariamente. Si los hechos prohibidos por esta ley, se hubieran cometido por empresas cuyas actividades afecten directamente a la defensa nacional o hallándose la Nación en estado de guerra, el máximo de las sanciones se elevará al doble. Las sanciones establecidas por este artículo no podrán gozar de los beneficios de la condena de ejecución condicional que establece el artículo 26 del Código Penal.

«Las personas que reincidiesen en condena por haber cometido alguno de los delitos que se

especifican en esta ley, concurrentemente serán pasibles: a) De inhabilitación perpetua para ejercitar sus derechos cívicos si son ciudadanos argentinos nativos; b) De anulación de sus cartas de ciudadanía y extrañamiento del país después de cumplir la condena, si son ciudadanos naturalizados; c) De extrañamiento del país después de cumplir la condena, si fuesen extranjeros.»

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

Creo, señor presidente, que se ha deslizado un error al agregar la palabra «solidariamente». La solidaridad se refiere al orden civil, pero no se puede hablar de solidaridad en materia penal. Suprimiendo la palabra «solidariamente», quedaría bien.

Sr. Presidente. — Ha sido un error.

Sr. Ramella. — Ha habido un error en la redacción de la última parte del artículo, cuando dice «los que reincidiesen en condenas».

Sr. Molinari. — Debe ser «los que reincidiesen en la comisión de delitos penados por esta ley».

Sr. Saadi. — Pediría que se leyera nuevamente el artículo.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (*Leyendo*): «Artículo 4º — Los que violen lo dispuesto por los artículos 1º y 2º de esta ley y también los que tomen parte en los actos que ella prohíbe en carácter de banqueros, serán penados con prisión de 1 a 6 años, cuando sean personas vivientes, y multa de \$ 2.000 a \$ 1.000.000, cuando sean personas jurídicas, asociaciones o sociedades, y los directores, a su vez, serán pasibles de la misma condena que las establecidas para las personas de existencia física. Si los hechos prohibidos por esta ley se hubieran cometido por empresas cuyas actividades afecten directamente a la defensa nacional, o hallándose la Nación en estado de guerra, el máximo de las sanciones se elevará al doble. Las sanciones establecidas por este artículo no podrán gozar de los beneficios de la condena de ejecución condicional que establece el artículo 26 del Código Penal. Las personas que reincidiesen en condena...»

Sr. Molinari. — «Las personas que reincidiesen en la comisión de delitos penados por esta ley...», habría que poner.

—Asentimiento.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (*Leyendo*): «Las personas que reincidiesen en la comisión de delitos penados por esta ley, concurrentemente serán pasibles: a) De inhabilitación perpetua para ejercer sus derechos cívicos, si son ciudadanos argentinos nativos; b) De anulación de su carta de ciudadanía y extrañamiento del país después de cumplida la con-

dena, si son ciudadanos naturalizados; c) *Del extrañamiento del país después de cumplida la condena, si fuesen extranjeros.*»

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo tal cual se acaba de leer.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo 5º del proyecto de ley del señor senador Molinari.

—Se lee:

Artículo 5º — En los casos de condena de una persona jurídica, asociación o sociedad, se podrá imponer como sanción la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas o concesiones que se le hubieren otorgado.

Sr. Bavio. — Propongo se diga «como sanción complementaria» antes de las palabras *la pérdida de la personería*, etcétera.

Sr. Molinari. — «Se impondrá» en lugar de «se podrá imponer».

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo 5º, con las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (*Leyendo*): «Artículo 5º — En los casos de condena de una persona jurídica, asociación o sociedad, se impondrá como sanción complementaria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas o concesiones que se le hubiesen otorgado.»

Sr. Presidente. — Se va a votar.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Solicitaría que esta disposición legal, en razón de una mejor economía de la ley, no se sancionara, pues para retirar la personería jurídica a las entidades que resulten nocivas para nuestra actividad comercial, no es necesaria ninguna condena previa. El Poder Ejecutivo nacional o provincial, en ejercicio de atribuciones exclusivas, puede retirar la personería jurídica a cualquier entidad ideal que se considere contraria al orden público y al objeto para que fué creada, según lo expresa el artículo 48, inciso 2º, del Código Civil.

No hay duda de que el Poder Ejecutivo puede proceder de inmediato, aun antes de la condena judicial.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Creo que las razones jurídicas que da el señor senador no se contradicen con lo que especifica este artículo, porque aquélla es una facultad del Poder Ejecutivo y ésta es una obligación del juez. Este artículo, quizá vendría a ser una redundancia, pero como lo que abunda no daña, le damos fuerza imperativa a la disposición de retirarle la personería.

Sr. Molinari. — Es afilar la uña...

Sr. Saadi. — Lo hacía, señor presidente, basado en un principio de economía de la ley, como creo lo interpretarán los señores senadores.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 5º tal cual acaba de leerse.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Queda reemplazado el artículo 5º del decreto del Poder Ejecutivo por el que se acaba de votar.

En consideración el artículo 6º.

—Se lee:

Artículo 6º — Decláranse de utilidad pública los bienes de las personas jurídicas, asociaciones o sociedades a las que se hubieren aplicado las penalidades del artículo anterior si a juicio del Poder Ejecutivo fuese indispensable la continuación de sus actividades, quedando facultado el mismo:

- a) Para proceder a la transformación de las empresas mencionadas en entidades oficiales o mixtas, a cuyo efecto su valor se determinará por aplicación de la ley 189 y decreto legislativo que la modifica;
- b) Para proceder a la venta de las mismas, mediante remate público, a ciudadanos argentinos o compañías, sociedades o entidades constituidas en la República, que ofrezcan suficiente garantía.

En ambos casos, podrá declarar transferidas a la nueva empresa las prerrogativas o concesiones aludidas en el artículo anterior, y satisfechas las erogaciones que se especifican en el artículo 7º, el excedente será entregado a sus propietarios.

Sr. Molinari. — Podríamos suprimir en el inciso a), donde dice «por aplicación de la ley 189 y decreto legislativo que la modifica», la calificación de *legislativo*.

Sr. Ramella. — Yo propondría que se sustituyeran las palabras «de la ley 189 y decreto legislativo que la modifica», por la expresión «de la ley de expropiación en vigencia». Sabemos que la ley 189 ha sido modificada por un decreto ley que, requiriendo la ulterior aprobación del Congreso, quizá ha de sufrir reformas. Si establecemos en las normas de la ley de monopolio que se aplicará la ley 189, vamos a establecer dos sistemas de expropiación cuando se dicte la nueva ley; uno que será el nuevo y otro el que se deba aplicar para los casos que corresponda. Yo creo que en esa forma, como no es imprescindible determinar el número de la ley, sería suficiente decir *de la ley de expropiación en vigencia*. Entonces abarca todas las posibles reformas que se hicieran de las leyes de expropiación.

Sr. Molinari. — Queda mejor de las leyes de expropiación en vigor.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Descartaría solicitarle al señor autor de esta modificación una pequeña aclaración con respecto a la redacción del artículo que se acaba de leer.

Si bien es cierto que en el mismo se ha hecho mención al procedimiento a seguirse, el de la ley 189 —no sé si interpreto mal—, quiero averiguar si con esto se crea un nuevo régimen de expropiación, ya que de acuerdo al existente, cada caso, cada oportunidad de expropiación debe ser declarada por el Congreso o por las legislaturas respectivas. Ese es nuestro régimen anterior o vigente, actualmente, de expropiación. Quiero saber claramente si por esta disposición creamos un nuevo régimen de expropiación con carácter general para todos, y si eso no estaría reñido con el artículo 17 de la Constitución nacional.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

La forma primitiva de la redacción del inciso a) es muy clara y el procedimiento de expropiación es el conocido.

Sr. Saadi. — Es el conocido.

Sr. Molinari. — La observación que acaba de hacer el señor senador por San Juan, evidentemente, contempla la ulterior modificación de este régimen de expropiaciones. De modo que en la forma propuesta por el señor senador por San Juan no se modifica en absoluto el sistema actual de expropiación. Ocurre tal cual debe ser, bajo el imperio de la ley en vigor. Si mañana el Congreso resuelve un régimen distinto de expropiación, evidentemente desaparecería el artículo y a aquél quedaría sujeto cada vez que se tuviese que aplicar el inciso a), porque al decir «y las leyes de expropiación en vigor», se refiere a las que están en vigor a la fecha en que tienen que ser aplicadas.

Sr. Saadi. — Eso es lo que quiero averiguar.

Sr. Molinari. — No hay un procedimiento de excepción.

Sr. Saadi. — Vale decir que en cada caso habría que declarar la utilidad pública.

Sr. Molinari. — Quedaría «... de acuerdo con la ley en vigor». Si mañana se modifica por el Congreso, será de acuerdo con el nuevo sistema.

—Ocupa la Presidencia el señor senador doctor Ernesto F. Bavio.

Sr. Molinari. — Se puede leer cómo quedaría el artículo, con la modificación propuesta por el señor senador por San Juan.

Sr. Antille. — Pido la palabra para agregar que, de mi parte, acepto la modificación, pudiéndose consignar lo siguiente para mayor claridad: «... de acuerdo con la ley de expropiación respectiva».

Sr. Soler. — Pido la palabra.

En la última parte del inciso b) del artículo 6º...

Sr. Molinari. — Convendría votar primero el inciso a).

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (*Leyendo*): «Artículo 6º — Decláranse de utilidad pública los bienes de las personas jurídicas, asociaciones o sociedades a las que se hubieren aplicado las penalidades del artículo anterior si a juicio del Poder Ejecutivo fuese indispensable la continuación de sus actividades, quedando facultado el mismo: a) Para proceder a la transformación de las empresas mencionadas en entidades oficiales o mixtas, a cuyo efecto su valor se determinará de acuerdo con la ley de expropiación respectiva —ésta es la modificación propuesta por el señor Antille—, por las leyes de expropiación en vigencia», es la modificación propuesta por el señor senador Ramella.»

Sr. Molinari. — Estoy de acuerdo con la modificación propuesta por el señor senador Antille.

—Asentimiento.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a leer nuevamente el inciso b).

—Así se hace.

Sr. Soler. — Deseo hacer una observación a la segunda parte del inciso b), que dice: *En ambos casos podrá declarar transferidas a la nueva empresa las prerrogativas o concesiones aludidas en el artículo anterior...*, etcétera. Propongo cambiar las palabras *podrá declarar*, por *declarará*, porque no tendría objeto hacer constituir una sociedad, darle las prerrogativas o que se la haga constituir para substituir a la anterior, si no se le conceden las mismas prerrogativas y privilegios que tenía antes.

Sr. Molinari. — Aceptado.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — El inciso b) segunda parte, quedaría así: «En ambos casos *declarará* transferidas a la nueva empresa las prerrogativas o concesiones aludidas en el artículo anterior y satisfechas las erogaciones que se especifican en el artículo 7º, el excedente será entregado a sus propietarios.»

Sr. Presidente (Bavio). — Se va a votar el inciso b) con las modificaciones propuestas.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Molinari. — Queda entonces sancionado el artículo 6º.

Sr. Presidente (Bavio). — La Presidencia entiende que queda derogado el artículo 69 del proyecto del Poder Ejecutivo y reemplazado por el que acaba de votarse.

—Asentimiento.

—Se lee:

Artículo 70. — Los tribunales, al dictar la prisión preventiva de los procesados, deberán decretar el embargo de sus bienes y el de las mercaderías, valores y demás bienes de las personas jurídicas sujetas a proceso, los cuales quedarán afectados a la multa y a las otras consecuencias del juicio e indemnizaciones a que hubiere lugar.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, doctor J. Hórtensio Quijano.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

El proyecto del Poder Ejecutivo, que se tomó como base, tenía otra economía en cuanto a los jueces que aplican la ley de forma; pero como hemos sancionado la forma procesal en lo que se refiere a la ley de abastecimiento o de precios máximos, según se la quiera designar, he de proponer al final que sean esos jueces y ese procedimiento, en cuanto pueda aplicarse, el que se tome en cuenta para la aplicación de esta ley de fondo en la parte Capital y territorios nacionales. Casi convendría, en lugar de decir *tribunales*, decir los *jueces*, etcétera.

Sr. Soler. — Voy a pedir a la comisión quiera aceptar en la primera parte del artículo 70 la substitución de las palabras *deberá decretar*, por *decretará*, para hacerla más imperativa.

Sr. Molinari. — De acuerdo. En todo momento daremos esa forma.

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo 70, con las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (*Leyendo*): «Artículo 70. — Los jueces al dictar la prisión preventiva de los procesados, *decretarán* el embargo de sus bienes y el de las mercaderías, valores y demás bienes de las personas jurídicas sujetas a proceso, los cuales quedarán afectados a la multa y a las otras consecuencias del juicio e indemnizaciones a que hubiere lugar.»

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 89. — A los fines del cumplimiento de la presente ley, la autoridad administrativa que corresponda queda facultada para:

- Requerir informaciones generales o especiales, referentes a determinadas actividades económicas;
- Establecer y verificar existencias; comprobar orígenes y costos;
- Solicitar directamente a las reparticiones administrativas nacionales, provinciales y municipales, informes, estadísticas, documentos y demás datos que consideren necesarios.

—Sin observación se aprueba.

—Se lee:

Artículo 90. — Cuando por denuncia, querrela o de oficio, se llegare a comprobar la existencia de indicios o presunciones de infracción a la presente ley, la autoridad administrativa que corresponda procederá a instruir sumario, a cuyo efecto queda facultada para:

- Requerir el auxilio de la fuerza pública, para hacer comparecer al imputado o a cualquier otra persona que se considere conveniente;
- Practicar careos y reconocimientos en rueda de personas; y recibir declaraciones, bajo juramento, a testigos;
- Decretar la producción de peritaciones en toda clase de libros, papeles, correspondencia y documentos de las personas y entidades investigadas.

Si con motivo del ejercicio de las atribuciones mencionadas, fuese necesario practicar allanamientos y secuestros, registros e inspecciones de oficinas, libros, papeles, correspondencia y documentos, los jueces competentes deberán expedir las órdenes correspondientes, verificando previamente si la naturaleza del procedimiento guarda relación con los hechos investigados. Tales órdenes no serán necesarias para los allanamientos y secuestros en negocios, comercios, locales, centros de reunión o recreo, establecimientos industriales y rurales y locales abiertos al público.

Sr. Soler. — En este artículo, señor presidente, me parece que sería mejor, en vez de las palabras *autoridad administrativa*, consignar las palabras *el tribunal que corresponda*.

Sr. Molinari. — Sería mejor, en substitución de las palabras *autoridad administrativa*, colocar las palabras *la autoridad que corresponda*.

Sr. Saadi. — Colocando las palabras *la autoridad que corresponda*, va a quedar mejor, pues puede ser, también, la autoridad administrativa.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Si no se hace otra observación, se va a votar el artículo 90, con la modificación propuesta.

—Se vota y aprueba.

—Se lee:

Artículo 10. — La Secretaría de Industria y Comercio ejercerá las atribuciones que se enumeran en los artículos anteriores en todo el territorio de esta Na-

ción, cuando las violaciones a las percepciones de esta ley dificulten o perjudiquen o puedan dificultar o perjudicar a personas o cosas que están afectadas al comercio interprovincial o nacional.

La Policía Federal prestará a la Secretaría de Industria y Comercio el auxilio necesario a fin de ejercitar todas las facultades mencionadas precedentemente.

Las provincias dictarán las disposiciones necesarias para la aprobación de la presente ley. A tal fin podrán solicitar la cooperación de comisiones investigadoras de la Secretaría de Industria y Comercio.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

El proyecto del Poder Ejecutivo contiene la enumeración de las autoridades tal como están ahora constituidas dentro de la administración pública, pero en esta ley, en el artículo 10, en lugar de decir *La Secretaría de Industria y Comercio*, debe decirse *El Poder Ejecutivo*.

En el mismo artículo, debe suprimirse el párrafo que se refiere a la Policía Federal, porque al poner, al principio del artículo, *El Poder Ejecutivo*, se entiende que éste tiene en sus manos todas las facultades legales necesarias para ejercer sus atribuciones, inclusive la Policía Federal. En el mismo sentido, en el final del artículo deben suprimirse las palabras de *la Secretaría de Industria y Comercio* y decir: *A tal fin podrán solicitar del Poder Ejecutivo nacional...*

Sr. Presidente. — Se leerá el artículo tal como ha quedado con las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (*Le-yendo*): «Artículo 10. — El Poder Ejecutivo ejercitará las atribuciones que se enumeran en los dos artículos anteriores, en todo el territorio de la Nación, cuando las violaciones a los preceptos de esta ley dificulten o perjudiquen o puedan dificultar o perjudicar a personas o cosas que estén afectadas al comercio interprovincial o nacional.

«Las provincias dictarán las disposiciones necesarias para la aplicación de la presente ley. A tal fin podrán solicitar del Poder Ejecutivo nacional la cooperación de comisiones investigadoras.»

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo en la forma en que se ha leído.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 11. — Los jueces federales conocerán en todas las causas por violación a la presente ley, cuando los hechos denunciados afecten o pudieren afectar al comercio interprovincial o nacional, siendo competente para entender en las mismas, el juez de sección en cuyo distrito se ha cometido el hecho, o se encuentre

instalado el principal domicilio o asiento de los negocios o el domicilio real de cualquiera de las personas imputadas.

Los tribunales provinciales u ordinarios de la Capital conocerán de los delitos previstos en esta ley, cuando los hechos imputados o denunciados correspondan a su jurisdicción.

Sr. Molinari. — En el segundo párrafo de este artículo propongo que se reemplace las palabras ... *u ordinarios de la Capital*, por las siguientes ... *o los jueces designados de acuerdo con la ley de creación de tribunales y procedimiento para la aplicación de la ley de abastecimiento*.

Sr. Soler. — Yo haría un agregado en el sentido de que no solamente se refiera a la Capital Federal sino también a los territorios nacionales.

Sr. Molinari. — De acuerdo, porque son los jueces creados por la ley a que me he referido, que contempla también a los territorios nacionales.

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo tal como queda.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (*Le-yendo*): «Los jueces federales conocerán en todas las causas por violación a la presente ley cuando los hechos denunciados afecten o pudieran afectar al comercio interprovincial o nacional, siendo competente para entender en las mismas el juez de sección en cuyo distrito se ha cometido el hecho, o se encuentre instalado el principal domicilio o asiento de los negocios, o el domicilio real de cualquiera de las personas imputadas.

«Los tribunales provinciales o los jueces designados de acuerdo con la ley de creación de tribunales y procedimiento para la aplicación de la ley de abastecimiento, conocerán de los delitos previstos en esta ley, cuando los hechos imputados o denunciados correspondan a su jurisdicción.»

Sr. Molinari. — De manera que es para la Capital o territorios nacionales, según la ley que ya se votó anteriormente. En esa forma queda completamente claro.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo con las modificaciones propuestas, tal cual se ha leído.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 12. — Terminado el sumario de prevención la autoridad administrativa que lo haya instruido lo elevará al juez federal o al juez de sentencia que corresponda, quienes actuarán con arreglo a lo dispuesto para los juicios correccionales en el Código de Procedimientos en lo Criminal para la justicia federal y los tribunales de la Capital y territorios nacionales, hasta tanto el Honorable Congreso dicte normas especiales sobre la materia.

La repartición administrativa a la cual se encomiende el cumplimiento de esta ley, podrá, en los casos que considere necesario y por intermedio del funcionario letrado que designe, reemplazar en sus funciones ante las autoridades judiciales, al ministerio fiscal, con exclusión de los enunciados en los incisos 4º y 5º del artículo 118 del Código de Procedimientos en lo Criminal, en las que ese ministerio continuará siendo parte.

Los particulares damnificados podrán actuar como querellantes ante las autoridades administrativas y judiciales.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Voy a pedir una aclaración a la comisión respecto a ese artículo, porque tengo entendido que se piensa hacer intervenir a los jueces especiales creados, en todo lo que se relacione con la aplicación de la ley.

Sr. Molinari. — Eso ya está votado con el artículo 11.

Sr. Soler. — Entonces, éste está de más, porque aquí se hace intervenir a otros jueces.

Sr. Molinari. — Intervienen dos jueces: los federales en algunos casos —los casos federales—, y los jueces locales, en los casos de justicia local.

Sr. Soler. — El artículo 12 habla del Código de Procedimientos, y yo creo que hemos modificado con la nueva ley el código, dándole más rapidez a la instrucción del sumario y a la administración de la justicia. Esto tendría que modificarse, en el sentido de aplicar la ley penal que dictamos en la sesión pasada.

Sr. Molinari. — En la parte de justicia federal se aplica el Código de Procedimientos, y nosotros no hemos legislado para la justicia federal en la ley a que se ha referido el señor senador.

Sr. Soler. — Entonces, ¿no hay contradicción?

Sr. Molinari. — No hay contradicción.

Está de más la parte que dice: *...hasta tanto el Honorable Congreso dicte normas especiales sobre la materia.*

Sr. Ramella. — Evidentemente, está de más el párrafo último.

Sr. Molinari. — Está de más, porque ya hemos creado jueces de procedimiento al dictar la ley de abastecimientos.

Sr. Ramella. — Creo que también está de más el párrafo que dice que la repartición administrativa reemplazará en ciertos casos al ministerio fiscal, porque ya hemos establecido en la ley cuáles son los fiscales que intervendrán, y en cuanto a la justicia federal, pueden actuar perfectamente los fiscales federales.

Sr. Molinari. — Perfectamente. Toda esa parte se puede suprimir.

El artículo quedaría así: «Terminado el sumario de prevención, la autoridad que lo haya

instruido, lo elevará al juez federal o al juez de sentencia que corresponda, quienes actuarán con arreglo a lo dispuesto para los juicios correccionales en el Código de Procedimientos en lo Criminal, para la justicia federal y los tribunales de la Capital y territorios nacionales, según la ley que los crea.

«Los particulares damnificados podrán actuar como querellantes ante las autoridades administrativas y judiciales.»

Como se ve, se simplifica, porque se elimina toda la parte administrativa, que ha sido suplida con los jueces y procedimientos de la ley que hemos sancionado en la sesión pasada.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Desearía una aclaración de la Comisión de Legislación.

En el caso de pena corporal, ¿se sigue el mismo procedimiento establecido por la ley anterior?

Sr. Ramella. — Aquí dice que se aplicará el procedimiento del juicio correccional.

Sr. Molinari. — En la ley anterior hemos establecido que se sigue un procedimiento ordinario para la pena corporal. Lógicamente, en la pena corporal siempre hay un máximo de garantía.

Sr. Saadi. — Eso es lo que quería dejar establecido.

Sr. Ramella. — Me parece entonces que deberíamos aclarar eso. Es muy justa la observación del señor senador por Catamarca. Aquí dice que en todos los casos se actuará con los procedimientos para los juicios correccionales, que es un procedimiento más breve que para los juicios comunes. Yo creo que se podría aclarar que para los casos de pena corporal se aplicará el procedimiento del juicio ordinario.

Sr. Presidente. — ¿Quiere redactar el agregado, señor senador?

Sr. Ramella. — «Para los casos de aplicación de pena corporal, se aplicará el procedimiento del juicio ordinario.»

Sr. Soler. — Quería hacer una observación sobre la segunda parte que dice: «La repartición administrativa a la cual se encomienda el cumplimiento...»

Sr. Molinari. — Esa parte ha sido suprimida.

Sr. Presidente. — Se va a leer el artículo con las modificaciones propuestas.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (*Le-
yendo*): «Artículo 12.—Terminado el sumario de prevención, la autoridad administrativa que lo haya instruido lo elevará al juez federal o al juez de sentencia que corresponda, quienes actuarán con arreglo a lo dispuesto para los juicios correccionales en el Código de Procedimientos en lo Criminal para la justicia federal y los tribunales de la Capital y territorios nacionales.

«Los particulares damnificados podrán actuar como querellantes ante las autoridades administrativas y judiciales.

«Para los casos de aplicación de pena corporal, se aplicará el procedimiento del juicio ordinario.»

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 13. — La acción penal por los delitos previstos por esta ley:

- a) Prescribirá, aun en los casos en que la pena aplicable sea de multa, a los diez años;
- b) No se extinguirá por el pago voluntario del máximo de la multa.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Si aceptase el señor miembro informante de la Comisión de Legislación, le propondría que se modifique el término de diez años por el de cinco a los efectos de la prescripción. Si bien es cierto que debemos buscar que esta ley se cumpla, que la sanción se aplique, que no prescriba, como ocurría con la ley anterior, en que el término era demasiado corto, creo que con cinco años es más que suficiente para que no pueda prescribir ninguna pena, máxime con el procedimiento breve que se adopta. Podría modificarse el término para que no resulte exagerado.

Sr. Antille. — No hay inconveniente en reducir el término de prescripción.

Deseo hacer una observación con respecto al inciso b). La pena puede ser simplemente de multa. En el caso de que la condena fuera el pago de una multa, se cumple la condena pagando la multa y se extingue la acción una vez cumplida la pena. Hay una contradicción en la parte del inciso b) en cuanto establece que no se extingue por el pago voluntario del máximo de la multa. Habría que aclarar si con el pago forzado se extingue.

Sr. Saadi. — Creo que no debe suprimirse este inciso y debe quedar tal como está, porque, por ejemplo, a las personas de existencia física se les aplica multa y pena corporal, simultáneamente, y tratándose de personas jurídicas, multa y prisión a los directores. De tal manera que es necesario que se conserve esta disposición.

Sr. Antille. — Si lo que se busca es la acción a los efectos de persecución de los directores, como una consecuencia del delito, en ese sentido sí puede mantenerse.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo con la modificación propuesta por el señor senador por Catamarca.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 14. — El que, en forma accidental o permanente, participe en el ejercicio de las facultades de investigación y verificación establecidas en la presente ley, incurrirá en las sanciones previstas en el artículo 156 del Código Penal, si divulgare actuaciones o procedimientos de la investigación. Esta infracción dará lugar al ejercicio de la acción pública.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

Creo, señor presidente, que este artículo estaría de más, dado que esta situación ya está contemplada por el carácter del sumario, que es secreto, y toda persona que viole el secreto del sumario tiene establecidas las penas correspondientes en la ley de fondo y en la de forma. Cuando ya deja de ser sumario y empiezan las audiencias y se da vista al interesado, entonces es público y todo el mundo puede tener conocimiento de las actuaciones.

Sr. Bavio. — ¿No se referirá al caso de violación del secreto de actuaciones administrativas?

Sr. Saadi. — Es secreto siempre. Es el mismo caso de la policía, en la instrucción de un sumario por un delito cualquiera. Si se llega a dar conocimiento a extraños, existen penas establecidas por la ley.

Sr. Bavio. — Pero podría ser que alguien interpretara que en materia administrativa no rigen las disposiciones del secreto del sumario.

Sr. Saadi. — Esta no es cuestión administrativa, es cuestión de carácter penal. Si bien interviene la autoridad administrativa, al igual que interviene en los demás delitos, la policía actúa en carácter de juez de instrucción.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

Tiene razón el señor senador y es claro que podríamos suprimir este artículo, porque está todo en la ley de fondo y en la de forma correspondiente, según sean las jurisdicciones; pero me inclino a mantenerlo, aunque resulte un poco redundante, ya que así queda clarísimo el sentido de la ley.

Sr. Saadi. — Con esta aclaración formulada en el momento de discutirse la ley, queda claramente establecido, y no habrá lugar a dudas que nosotros hemos querido que eso se reprima y se le ha dado carácter de secreto.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

Tiene razón otra vez el señor senador, porque los jueces acuden, por supuesto, cuando hay alguna duda, como primera interpretación, a la fuente auténtica, vale decir, a la discusión que nosotros realizamos en la sanción de una ley. Mas, no es muy frecuente que esto suceda. Mejor es, repito, aunque le parezca al señor senador que es redundante, que dejemos este artículo para que no quepa duda de ninguna naturaleza en el ánimo de nadie, y para que en la ley quede perfectamente establecido lo relativo al procedimiento y sanciones, en todos los aspectos del proceso.

Rogaría al señor senador, en mérito a este razonamiento, que mantuviésemos el artículo tal como está.

Sr. Saadi. — No tengo inconveniente.

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 15. — El producido de las multas deberá destinarse al Instituto Nacional de Previsión Social.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

Desde el punto de vista financiero, el destino a un determinado instituto es inconveniente. En realidad el producido de estas multas debe ingresar a rentas generales.

Varios señores senadores. — Apoyado.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

Yo agregaría que el ingreso de las multas se haga a rentas generales, pero según la jurisdicción, donde se ha cometido el delito.

Sr. Antille. — ¿Cómo quedaría?

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (Leyendo): «Artículo 15. — El producido de las multas ingresará a rentas generales de la Nación o de las provincias, según la jurisdicción donde se haya cometido el delito.»

Sr. Molinari. — Introducimos una buena práctica con esta disposición, en la distribución de las sumas que se producen por multas.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo tal como se ha leído por Secretaría.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 16. — El Poder Ejecutivo determinará los casos en que la Inspección de Justicia deba requerir informes a la Secretaría de Industria y Comercio antes de otorgar personería jurídica.

Sr. Molinari. — Pido la palabra para aconsejar que se suprima este artículo, porque correspondería al decreto reglamentario de la ley.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — Se va a votar si se suprime el artículo.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 17 (que pasa a ser 16). — Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los convenios, pactos, combinaciones, amalgamas o fusiones de capitales, cuya finalidad sea dedicarse exclusivamente al comercio exterior de la República y actúen en

defensa de la economía nacional, lo que será establecido previo informe del Banco Central de la República Argentina.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

Este artículo, que corresponde a la combinación que dije existe en la legislación americana, es una adaptación de las leyes básicas Sherman y Webb, y en la última parte podría suprimirse, cuando expresa que será establecido previo informe del Banco Central de la República Argentina. También esto correspondería al decreto reglamentario.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

Yo pediría que se suprima este artículo. Esta norma me recuerda los tiempos en que se castigaba la piratería internacional y al mismo tiempo se daban patentes de corso, para que se hiciera la piratería en favor de una nación determinada. ¿Por qué estamos dictando esta ley de monopolios? Porque los monopolios, los trusts, conspiran y hacen su negocio en base del hambre del pueblo argentino. Las amalgamas o fusiones se autorizan con el objeto, se dice aquí, de defender la economía nacional, pero, en realidad, es para ir en contra de otros pueblos de la tierra. No desconozco, indiscutiblemente, que el capitalismo internacional tiene poderosa influencia en los gobiernos, y ha hecho dictar leyes como la que recién expresaba el señor senador por la capital; pero, en mi concepto, eso constituye una verdadera inmoralidad.

Aparte de esa razón de orden moral, que para mí es fundamental, me parece que este artículo, sí, es una válvula de escape, para que todo el mecanismo de la ley se venga abajo.

Bajo la apariencia de constituir monopolios y trusts para defender la economía nacional, en realidad, se van a constituir monopolios y trusts para ir en contra de los intereses del pueblo argentino.

Bien saben los señores senadores los hilos sutiles y bien cargados de oro que tienden estos grandes consorcios financieros para infiltrarse en todos los organismos administrativos, en la vida toda de la Nación. ¿Y qué va a ocurrir? Que se autorizará esta clase de monopolios y trusts, y esos mismos monopolios y trusts se volverán en contra del pueblo argentino.

Quiero dejar sentada mi opinión absolutamente contraria al mantenimiento de este artículo.

Sr. Soler. — Pido la palabra, para apoyar la moción del señor senador por San Juan, en el sentido de que se suprima este artículo.

Los Estados Unidos de América, por ejemplo, tienen las leyes de represión de los trusts y tienen leyes que fomentan la estructuración

de trusts para implantarlo en países extranjeros. Pero, si nosotros estamos criticando y somos víctimas de los trusts de capitalistas extranjeros, yo creo que no es moral que defendamos nuestra situación interna y facilitemos, con este artículo, la estructuración de trusts para ir contra los países vecinos o contra otros países del mundo.

Hay otro artículo de esta ley que habla de los trusts para el comercio interno y externo de la República. Si, por otro lado, queremos combatir los trusts del comercio interno y externo de la República, con este artículo nosotros estamos estructurando prácticamente los trusts para fuera del país.

Yo considero, de acuerdo con la moción del señor senador por San Juan, que dentro de este estado jurídico, nosotros estaríamos cometiendo una inmoralidad. Lo que no queremos para nosotros, no debemos quererlo para nuestros hermanos.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

Dije que el mecanismo de esta ley, que proviene de un decreto ley del Poder Ejecutivo, responde al mecanismo de las leyes Sherman y Webb: condenar los trusts en lo interno en Estados Unidos y autorizarlos en la vida exterior de aquel país. La protección del Estado, que no merecen en el interior de los Estados Unidos, la obtienen en cuanto se ejercita esta función de trust y monopolio en lo que concierne a la vida exterior de aquella nación.

Es la diplomacia financiera la que va detrás de estas combinaciones. Y somos víctimas, precisamente, nosotros y tantos otros países, de este tipo de diplomacia financiera.

De manera que nadie puede oponerse a los conceptos de los senadores que han opinado en esta materia. Tal organización es inmoral: lo que no queremos para nosotros, mucho menos debemos quererlo para los demás.

Lo importante es que quede una constancia expresa en el debate de la ley, de que el comercio exterior de la República Argentina y la economía nacional tienen que ser defendidas de alguna manera. El método de comercialización en función de nuestra economía no puede marchar sobre la base de viejos preceptos. El comercio internacional se desenvuelve ahora de modo muy distinto.

Pero quiero traer a colación, señor presidente, un debate producido en este mismo recinto en el año 1929, cuando éramos senadores de la Nación el senador por Santa Fe, doctor Antille, y el que ahora habla, dentro de un Senado que no existía como tal, porque fuera de nosotros, lo demás era fraude.

Se debatió el pacto lord D'Abernoon. Lord D'Abernoon, eminente personaje británico, llegó a este país en 1929 con una misión especial para tratar precisamente todo lo referente al

intercambio económico, al modo económico y a la regulación del comercio entre Inglaterra y la República Argentina. Era entonces presidente el doctor Hipólito Yrigoyen y, como de costumbre y como siempre, cada vez que daba soluciones las daba en función de principios permanentes y con las largas vistas que le han caracterizado en la historia de nuestro país.

Nadie podía suponer lo que ocurriría, pero ya sentíamos los primeros ruidos, si se quiere, de la gran crisis que abatió al mundo desde 1929 en adelante. El doctor Hipólito Yrigoyen tuvo una clara visión de esto, que en aquel momento nadie hubiera podido tener. La crisis se desencadenó con la ruina del «Credit Anstalt» de la cadena Rotschild, uno de los trusts internacionales. Comenzó en Austria; la mala política de las combinaciones financieras de los inversores de capitales norteamericanos en cuanto a Europa se refiere, en aquella época; arrastró en la cadena de la crisis bancaria a los bancos de Alemania; cundió el pánico en las bolsas de Londres, Nueva York y París y la crisis financiera se tradujo en crisis total del sistema, hasta llegar aquel día lúgubre en que el presidente Roosevelt se hizo cargo de la presidencia, debiendo dar como primer decreto la vacación bancaria —*the banking holidays*—, lo que parecía ya el desastre del sistema capitalista.

Como dije, el doctor Hipólito Yrigoyen vio claro y antes que ningún otro este proceso, que, repito, se anunciaba tenuemente por indicios apenas visibles para muchos, pero para él de una evidencia total; y dió así la primera pauta de una regulación económica entre los países que, de haberse aprobado como debiera haberse hecho, habría salvado a esta Nación y a muchas otras de los desastres de esa enorme crisis a que acabo de referirme.

Fué precisamente en esa oportunidad que se concertó el pacto D'Abernoon. Hube de intervenir de un modo personal y directo en las negociaciones. El principio era claro y tan simple que parecía cosa baladí, mas no era por la simplicidad y por la claridad, menos eficaz y valledero. La regulación del comercio de país a país, no se puede entregar en mérito a la estructura comercial de los tiempos modernos, sino a los intereses combinados que siempre concluyen por ser monopolios. Esta es la verdad, me refiero al comercio con Gran Bretaña. Habría que reemplazar esto también. Entonces, la negociación tendría que hacerse de Estado a Estado, de gobierno a gobierno para regular en función estatal este comercio, defendiendo la economía nacional en el tráfico internacional. Pronuncié un discurso en este Honorable Senado que todo el mundo ha olvidado, y recuerdo perfectamente bien que sentado en una de estas bancas, expresaba palabras que se iban al viento, porque ninguno —salvo mis compañeros de sector, desde luego— ninguno de aquellos que

se decían senadores, salvo uno —hago esta justicia al mérito, me refiero al doctor Etcheverehé, senador por Entre Ríos—, comprendió cuál era el problema y adónde se iba con esta solución.

Los hechos, más tarde, dieron plena razón a esta solución de la organización del comercio internacional que se plantea por el pacto D'Abernoon, mas el Senado no prestó apoyo a aquella iniciativa del presidente Yrigoyen...

Sr. Bavio. — Pero el presidente Yrigoyen la firmó.

Sr. Molinari. — Sí, desde luego; pero el Senado no le prestó apoyo, es decir, aquello que se decía Senado de la Nación. ¡Y cómo habría de prestárselo si esas bancas estaban ocupadas por los abogados de los grandes trusts! ¡Ahí está el secreto de esa resistencia!

Muchos senadores han desaparecido ya de la escena y, desde luego, no voy a referirme a los hombres que pasaron a mejor vida.

Lord D'Abernoon, más tarde, publicó un libro haciendo mención de sus actividades en nuestro país y quejándose, por supuesto, de que no hubiera habido en la República Argentina la visión general que acompañase a la clara visión que el presidente Yrigoyen tuvo en esta materia.

La gran crisis que he delineado así, rápidamente, sobrevino en seguida; y, es natural, la marejada nos llevó como llevó a todo el mundo. Y aquellos que no quisieron aceptar el pacto D'Abernoon, firmaron el pacto Roca-Runciman, el signo de vasallaje económico más extraordinario que el país haya conocido durante toda su existencia, y que felizmente, dentro de pocos días, tendrá su fin.

La gran crisis de 1929, que trajo como resultado, más tarde, la guerra, puso sobre el tapete, con la guerra otra vez, los grandes problemas de la organización del comercio internacional. Y aun no se sabe hasta dónde se va a llegar. Pactos comerciales que se firman hoy, son pactos que envejecen mañana; soluciones que se proponen, tan pronto son propuestas y aceptadas las mejores, tienen que ser corregidas inmediatamente, porque el mundo, señores senadores, se halla hoy frente a una tremenda tragedia desde este punto de vista. Las masas productoras organizadas, se han dispersado; con sólo recordar que Alemania, Italia y Japón ya no existen desde este punto de vista, se comprenderá cuál es el problema.

Las masas consumidoras también se han dispersado, y hay, evidentemente, un problema tan hondo, mirado desde el punto de vista económico, que más tarde o más temprano tendremos que considerar en este Honorable Congreso, sobre la base de las propuestas que serán sometidas a su estudio por el Poder Ejecutivo de la Nación.

El acceso a los mercados de materias primas y a los mercados de consumo, se ha alterado con esta redistribución de las masas consumidoras y productoras, y en este sentido tendremos la más grave incógnita que resolver.

Claro está que la República Argentina en este momento es un país que se puede decir que es el oasis del mundo. Y analizaremos dentro de pocos días, entre otros, los problemas bancarios, que también vendrán a estudio del Honorable Senado.

Refiriéndome a este artículo incluido en el proyecto, diré tan sólo que él no fué agregado con el propósito de autorizar la amalgama de los trusts privados que explotan al consumidor, porque, desde luego —como se ha dicho—, no podemos querer para los demás lo que no queremos para nosotros. Y me bastan las expresiones formuladas por los señores senadores con respecto a este artículo, para que yo comparta, muy honrado, ese criterio, y admita su eliminación, ya que estaremos dentro de pocos días más en condiciones de referirnos a la economía nacional en razón de la economía del mundo, y volveremos a ser el pueblo que, feliz, ande por las sendas del universo desparramando a diestra y siniestra el pan nuestro de cada día, al que tienen derecho todas las multitudes sufrientes y hambrientas del orbe.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Deseo llamar la atención de los señores senadores respecto a la finalidad con que se ha incluido este artículo y a la finalidad establecida con toda claridad por los artículos 1º y 2º de la ley cuyo proyecto tratamos.

El delito que aquí se quiere configurar es aquel que surge de la fusión de capitales que tienden a lucrar, y comprende a los propietarios de los mismos y a las empresas que se trustifican para provocar en esa forma el alza de precios y beneficiarse con ese lucro. En cambio, el artículo que se discute ahora debería aclarar que se castiga porque se perjudica a la economía nacional y se perjudica a los adquirentes de las mercaderías que se producen en esa forma. Aquí lo que se quiere es beneficiar a la producción nacional haciendo una excepción en ese sentido.

Sr. Molinari. — Es exacto.

Sr. Antille. — Eso no puede ser delito, y creo que no es inmoral que la Nación o el Congreso defiendan la economía del país estableciendo esta excepción para los casos de empresas mixtas que puedan constituirse con la participación del Estado y con algunos otros capitales, y aun con empresas trustificadas, para beneficiar en esa forma la producción en favor de la economía nacional. Sobre todo, no puede ser considerada ésta una mala disposición en la ley, cuando el hecho ha de ser investigado previa-

mente por el Banco Central de la República, que es el que controla la economía general. Si el banco entiende que es beneficioso para la economía del país establecer un sistema mixto de explotación de cualquier rama, tendiente a la exportación y con la finalidad de beneficiar a la economía, nosotros debemos dejar que este artículo quede sancionado, porque eso no es un delito ni es una inmoralidad.

Por esas razones yo soy contrario a la supresión de la disposición que se discute.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

He escuchado con toda tranquilidad y frialdad los argumentos formulados por los señores senadores que me han precedido en el uso de la palabra, relacionados con este artículo.

Después de ello debo manifestar que comparto en un todo las razones de carácter económico dadas por los señores senadores Molinari y Antille. Creo, como muy bien lo ha dicho el señor senador por Santa Fe, que este artículo debe mantenerse y debe ser sancionado tal cual se encuentra redactado. Creo también, como bien lo ha expresado el señor senador Molinari, que esto será cuestión de tratarlo en el futuro.

Sr. Molinari. — No, en este mismo momento, y permíteme la interrupción el señor senador. La misión inglesa está en la tratativa, precisamente, para regular de alguna manera el comercio exterior en cuanto se refiere al comercio entre Inglaterra y Estados Unidos.

Sr. Saadi. — Continúo, señor presidente.

Bien conocemos la política exterior que desarrollan en estos momentos algunos países de la misma América, la que tiende a reprimir el trust y el monopolio en su país, mientras lo fomenta en el exterior.

Debemos recordar que, en cuanto a América se refiere, se ha firmado la Carta Económica de las Américas, que en el principio 4º se ha comprometido a buscar una pronta acción, por convenio entre los gobiernos, para impedir que los cárteles y otros arreglos comerciales particulares obstruyan el comercio internacional, sofoquen la competencia, y se interpongan a la eficiencia máxima de la producción, así como para lograr precios de competencia leal para los consumidores.

Aun así, esa acta firmada nos da más la razón para mantener este artículo hasta que se llegue a un pacto o a un convenio, porque no es posible que se abandone nuestra economía, y no se le dé ninguna protección cuando otros países fomentan e introducen el trust en nuestro país.

No es, de ninguna manera, una medida inmoral; es sencillamente una medida defensiva que se mantendrá hasta que todos los países comprendan esta situación, y lleguemos a un acuerdo, a un pacto, para bien de toda la humanidad.

Por estas consideraciones, apoyo la moción del señor senador por Santa Fe, de que se mantenga la disposición tal como está.

Sr. Tanco. — Pido la palabra.

Hago mía la moción del señor senador por San Juan, por las razones que paso a exponer.

Estamos combatiendo los trusts interiores, y estamos decididos a hacer otro tanto con los trusts exteriores. He de decir, en forma práctica, varias cosas que ocurren.

Tenemos, por ejemplo, el caso del azúcar. Este producto hoy no alcanza para el consumo del país. Y ¿por qué? Sencillamente porque el azúcar va hacia el exterior en forma de dulces y otras formas, mientras que escasea para la población argentina; y hoy nos encontramos, entonces, en la situación de tener que traerlo, cuando hay suficiente producción en el país. Me atrevo a hacer esta afirmación, porque en años anteriores nuestro país exportaba ese producto.

Como en el caso del azúcar, nos va a ocurrir con muchos otros artículos; al fomentar los trusts, van a ir al exterior, mientras el pueblo argentino va a carecer de ellos.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Es curioso cómo se interpreta la defensa del comercio interior, y la defensa del comercio exterior de un país. Yo, que no soy hombre especialista en asuntos financieros, me doy cuenta que está tan íntimamente relacionado el comercio interior con el comercio exterior, que es imposible dividirlos.

La gravitación de los productos de una nación tiene una correlación muy severa y estrecha con los precios del exterior, de manera que dividir el comercio interior del exterior, a mí me parece un poco difícil. El caso práctico sería el siguiente: establecido el trust de la venta de carne en Inglaterra o en Norte América o en otro país, forzosamente gravitaría ese trust, por elevación de precios, en esas naciones donde la tuvieran trustificada, sobre nuestra economía nacional, sobre el valor de nuestros vacunos, de nuestra hacienda, por la gravitación lógica que esta situación podría tener en el extranjero. Y quien habla de la carne, habla del lino o de cualquiera de nuestros productos. Gravita enormemente la cotización exterior sobre la cotización interior.

Yo sé, como lo saben los señores senadores, que la asociación lícita para el comercio lícito y la fusión lícita de capitales para el comercio lícito, no lo puede impedir la Nación ni lo debe impedir porque está bien claramente establecido en nuestra Constitución nacional. Aquí estamos tratando de combatir los efectos de las asociaciones ilícitas del capital y no los de las asociaciones lícitas.

Mañana podremos dar armas al Poder Ejecutivo, como dijo el señor senador Molinari, me-

diente la estructuración de nuestro crédito y nuestros bancos, para que el Poder Ejecutivo pueda regular nuestro comercio exterior y sea productivo para la Nación, sin que sea una opresión para las naciones pequeñas o grandes.

En último lugar, yo considero impropio que en una ley como la que estamos tratando, de persecución a los trusts, vengamos a establecer un artículo en que, prácticamente, lo establezcamos para el extranjero. Por eso considero que sería prudente no incluir este artículo en esta ley, porque lo considero políticamente inadecuado. Ya tendrá la Nación, mediante las leyes financieras que oportunamente se le darán, la forma de acrecentar y defender nuestra riqueza mediante la regulación de nuestro comercio exterior.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

Como se puede observar, señor presidente, todos estamos de acuerdo en cuanto a que ninguno de nosotros votaría jamás un artículo que significase la autorización del trust en función exterior, ya que lo combatimos en el interior. Esto es lo fundamental. En segundo lugar, todos estamos también de acuerdo en la absoluta necesidad de que haya una organización del comercio exterior que defienda nuestra economía nacional sobre la base de la cooperación, sobre la base de la colaboración y la complementación de la economía, ya sea continental o universal. En realidad, lo que estamos debatiendo es la oportunidad de que este artículo —sea redactado de una o de otra manera— esté en esta ley.

Si yo no tuviese presente que dentro de muy pocos días se sostendrá en esta Honorable Cámara el debate respecto a las leyes fundamentales de tipo bancario, quizá me aferraría al mantenimiento estricto de este artículo, porque no tendríamos otra salvación, sino dejarlo como está; pero no vacilo en decir que puede sacarse sin dificultad, ya que, con seguridad, tendremos que tratar esta materia y legislar sobre ella la semana que viene, cuando tratemos los proyectos bancarios. Ya que estamos todos de acuerdo en el fondo de la materia —y si acaso esta ley resultase trunca por no tener un artículo adecuado será debatida en la Cámara de Diputados y seguramente con algunas modificaciones volverá aquí, y tendremos tiempo para agregar alguna cosa—, yo creo que podríamos resolver entre todos la supresión de este artículo; ya que está bien aclarado en el debate cuál es la posición de los señores senadores que responden al movimiento revolucionario del 4 de junio. Así, llegaremos a donde tenemos que llegar.

Sr. Saadi. — Creo, sin embargo, no obstante lo manifestado por el señor senador, que debe mantenerse este artículo. Siempre estaremos a tiempo de modificarlo en el día de mañana,

cuando se llegue a una solución por un pacto o cualquier otra negociación exterior sobre esta materia.

No podemos dejar a la economía de nuestro país, así, completamente abandonada. Creo que estamos obligados a defenderla. Y un país que persiga una política idéntica a la que establece nuestro artículo —de aplicación en el extranjero—, si nosotros no adoptamos las medidas defensivas, no tendrá ningún interés en el día de mañana en celebrar un acuerdo para dejar sin efecto los monopolios y los trusts, si se lo fomenta en nuestro país. Y no podríamos, en esa forma, extirpar de raíz el mal que se persigue.

No es que se sancione ese artículo con carácter definitivo. Tiene un carácter precario, si quiere, si por parte de los demás países existe la misma buena, generosa y grande intención con respecto a nuestro pueblo.

Dejo salvada mi opinión al respecto, y mantengo el principio de que ese artículo debe ser sancionado tal como está proyectado.

Sr. Antille. — Pido la palabra.

Agregaré algunas razones más para sostener que no debe suprimirse de este proyecto de ley el artículo que discutimos.

Dentro del derecho penal es sabido que establecen penas para los hechos que tienen carácter de delitos y se crea una sanción; pero también se establecen las excepciones, cuando ellas son admisibles.

Se me ocurre un ejemplo. El hecho de matar el homicidio, tiene una sanción, un repudio general y una pena establecida; pero cuando la muerte se ocasiona en defensa legítima, no aplica la pena porque no hay delito.

Sr. Saadi. — ¡Muy bien!

Sr. Antille. — En este proyecto que discutimos, castigamos un delito, el delito de establecer monopolios o trusts para lucrar, sistema ideado para ganar con facilidad, perjudicando a los adquirentes; y, además, en el régimen que establecemos, se dice con toda especialización —porque se ha hecho alguna reforma para dejar esto bien destacado—, que el delito es formal, que toda combinación, que toda fusión de capitales por el solo hecho de realizarse, configura un delito. Si nosotros no establecimos ramos como defensa para la economía, que las combinaciones que pudieran hacerse para defender al país no están comprendidas en las disposiciones de esta ley, estableceríamos desde ya la imposibilidad de realizarlas, aunque fueran para defendernos de la concurrencia extranjera.

Considero, pues, que eso, evidentemente, no perjudica, sino que, en realidad, confirma que hemos establecido antes como delito. Eso no es delito, y debemos decirlo; si no por el hecho de ser un delito formal, debería castigarse.

Sr. Molinari. — Así es.

Sr. Durand. — Pido la palabra.

Deseo apoyar la moción del señor senador por Santa Fe.

El artículo habla bien claro y dice lo siguiente: «Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a los convenios, pactos, combinaciones, amalgamas o fusiones de capitales, cuya finalidad sea dedicarse exclusivamente al comercio exterior de la República y actúen en defensa de la economía nacional, lo que será establecido previo informe del Banco Central de la República Argentina.»

Quiere decir que esto es condicional. ¿Cómo se mandan al exterior los saldos exportables si no existen esas compañías, esas amalgamas de capital? En el exterior, señor presidente, habrá gobiernos que sabrán regular esa clase de actividades. Nosotros debemos ocuparnos de lo que ocurre en nuestro país. Por otra parte, está el Banco Central para indicar cuáles son las compañías o las amalgamas de capital que pueden beneficiar al país sin perjudicarlo.

De manera que, a mi juicio, se debe votar el artículo tal como lo ha proyectado la comisión respectiva. En ningún caso debe suprimirse porque está perfectamente regulado y controlado por nuestras propias autoridades y en este caso por el Banco Central.

Sr. Saadi. — Si luchamos contra los trusts, no puede haber otra solución, señor presidente.

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

Breves instantes voy a ocupar la atención del Senado para apoyar los conceptos del señor senador por Santa Fe. Pienso que no debe suprimirse este artículo.

Es evidente que la política exterior argentina y la política internacional, en todo sentido y en todos los puntos de vista, ha sido lo más altruista y desinteresada. Nadie puede olvidar que nuestro país ha proclamado aquel principio admirable de que la victoria no da derechos. Pero en materia de economía nacional y en los tiempos que corren, de plena transformación, las naciones necesitan los instrumentos necesarios para defender su economía. Este artículo está perfectamente aclarado para esa finalidad y tiene una doble garantía que se refiere a las combinaciones y a la formación de compañías con miras a la defensa de la economía nacional. Y agrega que debe ser previo informe del Banco Central. Y bien, señor presidente. ¿Cómo pueden dudar los señores senadores que en estos momentos, cuando el país, está regido por autoridades que indudablemente gozan de la confianza del pueblo, porque han surgido de su seno, autoridades que nos están demostrando el deseo de conducir a la Nación por una línea moral inconfundible, cómo pueden dudar, repito, que el Banco Central, en ningún momento podría dar un voto favorable a una combinación que no estuviera perfectamente

orientada a la defensa de la economía y a la colocación de los saldos exportables, como muy bien lo ha dicho el señor senador Durand?

Hay momentos en la economía del país en que el gobierno tiene que afrontar la situación de colocar sus saldos exportables, y en ese momento entraría a jugar el organismo que bajo el control estricto del gobierno de la Nación y previo informe del Banco Central, se creara.

Es por eso, señor presidente, que me inclino a pensar que debemos dejar esta arma, este recurso, este resorte, en manos del Poder Ejecutivo de la Nación.

Sr. Durand. — Quiero aclarar, señor presidente, un concepto.

El señor senador Tanco, mi distinguido colega por Jujuy, dijo hace un momento que la falta de azúcar para el consumo del país se debía, entre otras cosas, a los azúcares convertidos en dulces y exportados a diversos países.

Bien, señor presidente. El gobierno tiene en sus manos los resortes necesarios para regular la exportación, para que quede en el país la cantidad suficiente de azúcar para el consumo de la población. Pero la escasez de azúcar obedece a otras causas. Obedece a que existió aquí el monopolio del azúcar; había un pool, compuesto de cuatro firmas. Ese pool había establecido el prorrato de la plantación de azúcar en el país. En Corrientes, la provincia del señor presidente del Senado, donde la caña de azúcar se produce perfectamente bien, estaba restringida la producción de azúcar a un límite mínimo.

Sr. Bavio. — Y se pagaba, señor senador, para que no se produjera.

Sr. Durand. — Justamente. Entonces, señor presidente, ese pool no se dio cuenta de que al mantener la producción estrictamente de acuerdo con la demanda podía tener sorpresas, como ha pasado hace dos años, cuando apareció la plaga del carbón en los cañaverales tucumanos. Y eso motivó, naturalmente, una enorme disminución de la producción, complicada después con fenómenos de orden climático que redujeron aun más la producción. Si ese pool hubiese tenido la precaución de formar un stock de azúcar donde menos se despolarizara, por ejemplo en un lugar alto y seco como Córdoba, centro de la República, se hubiera evitado la terrible situación de tener mucho menos producción que demanda. Pero ellos solamente tuvieron como norma sus grandes ganancias. Y las tuvieron, señor presidente, pero no se preocuparon de hacer provisiones ni las provisiones que el caso exigía. Esa es, señor presidente, la aclaración que quería hacer.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Los pueblos del universo actúan de acuerdo a sus características propias. Hay pueblos que tie-

nen una tendencia eminentemente invasora y eminentemente imperialista. Los hay que actúan en el extranjero como verdaderas aves de rapiña, y nosotros, dentro del Senado argentino, debemos legislar como argentinos; no como norteamericanos. (*¡Muy bien!, en las bancas.*)

No debemos legislar para oprimir a nadie, ni política, ni territorial, ni económicamente. Y legislando como argentinos debemos dar una ley que sea argentina en su letra y en su espíritu. Lo que ha dicho el senador Bavio es la pura verdad. Hemos sentado como principio jurídico, que «la victoria no da derechos» en la órbita del derecho internacional, lo cual nos ha otorgado una gran consideración por parte de las demás naciones.

Y ahora nosotros que somos de un espíritu eminentemente liberal, justiciero y generoso, queremos introducir un artículo que nos transforma radicalmente en aves de rapiña para las naciones que están fuera de nuestra órbita. Yo me opongo a que se legisle en esa forma. Y debo decir a los señores senadores que si nosotros suprimimos este artículo ya, ¿el comercio exterior va a fracasar? ¿El comercio exterior no va a poder regularse, no va a poder actuar? Sí, señor, va a poder actuar lo mismo porque para eso podemos dictar leyes que estén en consonancia con lo que necesita la Nación.

Aquí se les da un privilegio que no se va a poder perseguir. Un monopolio puede estar apoyado por algunos funcionarios, inclusive por el Estado. Nosotros estamos legislando para la República Argentina y no para los hombres de buena fe que tenemos en el gobierno. Estos pueden cambiar. Nuestra legislación debe ser permanente y estable y no podemos permitir que mañana un directorio del Banco Central, en combinación con intereses de ellos mismos o de los señores capitalistas del país, nos introduzca un monopolio que no lo podemos perseguir porque está protegido por el articulado de esta ley.

Es verdad que cuando los hombres son bien intencionados, entonces las leyes pueden estar de más, según lo dijeron otros antecesores nuestros; pero nosotros no legislamos para un hombre, legislamos para la Nación. Los funcionarios que hoy tenemos nos merecen fe, ¿pero acaso no nos podríamos equivocar con algunos de ellos?; ¿y acaso tendríamos la seguridad de la continuidad de nuestras buenas intenciones y obras?

Nosotros debemos legislar para el porvenir argentino. No es que yo me oponga a que se regule el comercio exterior. El se puede regular, pero si nosotros ponemos en este artículo la protección de un monopolio determinado, con intereses determinados que pueden estar inclusive en contra de los intereses de la Nación, estamos haciendo un gran mal al país.

Suprimamos este privilegio y dejemos que la Nación se siga rigiendo permanentemente por los hombres bien intencionados y por el amplio espíritu generoso del pueblo de la República Argentina.

—Ocupa la Secretaría el senador Ramella

Sr. Amelotti. — Pido la palabra.

Yo soy un enemigo de los pools, de los trusts, de los cartels y de todos los sistemas que conduzcan a provocar u oprimir el consumo de las poblaciones. Se ha dicho en defensa de los monopolios que es el recurso práctico para facilitar su colocación. No es así, señor presidente. En realidad, los monopolios sólo persiguen un solo propósito, el de oprimir al consumidor, con el agravante de que standardiza la producción, evitando que triunfen los mejores o que se mejore en el sentido práctico lo que un hombre o un Estado puede producir.

Pero dejando de lado ese aspecto económico, me voy a referir al aspecto sentimental, como parecería ser el que se ha planteado en el seno de esta Cámara. Creo que nosotros nos debemos a la comunidad porque somos parte de ella, y criminal sería en nosotros pretender enriquecernos a costa del hambre o de la miseria de los demás; pero entiendo, también, que hay un adagio muy común en nuestro país, que dice que *la caridad bien entendida empieza por casa*. Creo que tenemos el deber elemental de proteger a nuestros productores. Si conviviéramos en un mundo donde repartiéramos nuestra riqueza y bienestar para que todos viviéramos felices y exactamente en las mismas condiciones, aceptaría el criterio que se pretende imponer; pero no olvidemos que el hecho de que nuestro trigo, carne, linó y todos nuestros productos hoy tengan un valor, se debe sencillamente a una circunstancia especialísima: que los países que los necesitan no los pueden producir, viéndose en la necesidad de comprarnos esos productos.

Yo pregunto si ese sentimentalismo ha llegado hasta el productor argentino cuando nuestros trigos se pudrían en las estibas, cuando se quemaba el maíz y cuando no teníamos a quién colocar nuestras carnes, y el gobierno argentino, el pueblo argentino tenía que amparar a los productores sacrificándonos a nosotros, los que realmente producíamos y trabajábamos, complicando y dificultando nuestra propia felicidad.

Entiendo, señor presidente, que no pretendemos lucrar con el hambre de nadie. No quiero creer que este artículo signifique que queremos explotar el mal ajeno. Nada de eso. Lo único que queremos hacer es, sencillamente, defender nuestro país y nuestras riquezas y acumular algunas reservas, porque podría muy bien ocurrir que, de aquí a dos, tres o cuatro años, aque-

llos pueblos que hoy necesitan de nuestros productos puedan abastecerse a sí mismos, y nosotros nos encontraríamos con que, a pesar de nuestras inmensas riquezas, seríamos un país pobre. Por estas circunstancias, porque entiendo y creo que debemos defender nuestras riquezas con el único propósito de ponernos a cubierto en las malas épocas, yo también considero que sería preferible que el artículo quedara como está.

Sr. Saadi. — Pido la palabra.

El señor senador Soler, en la brillante exposición que acaba de hacer en este Honorable Senado, no ha enfocado propiamente el problema y la finalidad que se persigue con la sanción del artículo tal cual está redactado. No se trata de sancionar una ley para proteger a aves de rapiña, como ha dicho el señor senador; de ninguna manera, señor presidente. Como bien dijo el señor senador por Santa Fe, se trata de una legítima defensa. Si los demás pueblos piensan y sienten como el nuestro, si están inspirados con ese espíritu generoso que tiene el nuestro, no habrá inconveniente en que esta tarde, esta noche, mañana o a breve plazo se pacten todos los convenios necesarios para combatir el trust y el monopolio en todos sus aspectos. Mas si existe alguno que persista en su política ofensiva desde el punto de vista económico, no puede permanecer el nuestro impasible; y bien sabido es, señor presidente, que toda guerra, llámese militar, económica o político-social, debe ser defensiva y ofensiva a la vez, porque quien se defiende sin ofender está condenado, en un plazo más o menos largo o corto, a sucumbir.

Repito, señor presidente: si los demás Estados están inspirados en idénticos propósitos que los del señor senador por Mendoza, y respecto a los cuales todos nos encontramos en idéntica situación, no tendríamos inconveniente en derogar esa disposición; pero mientras ello no ocurra, este artículo debe mantenerse tal cual está redactado, porque no constituye delito que se haga pasible de sanción alguna.

Sr. Durand. — Pido la palabra.

Quisiera, señor presidente, que mi distinguido amigo y colega, el señor senador Soler, me dijese qué puede hacer el país con los 10 ó 12.000.000 de toneladas de cereales, carnes y otros productos que tenemos, término medio, de sobrante, todos los años, y qué forman, realmente, la riqueza del país, riqueza que nos permite comprar en el exterior todo lo que necesitamos, como los implementos agrícolas y cien otros productos más, careciendo también de industria pesada.

A mi juicio, el artículo es bien claro, señor presidente. Y dice terminantemente: *... siempre que esas amalgamas o fusión de capitales*

actúen en defensa de la economía nacional... Y el Poder Ejecutivo se reserva el derecho de dirigir y controlar esas actividades para que sean benéficas a la economía de la Nación, por medio de su organismo económico máximo, que es el Banco Central de la República.

Evidentemente, señor presidente, sería imposible que alguna de esas empresas llegase a cometer un abuso, dado que los precios de compra de esos 10 ó 12.000.000 de toneladas están regulados por el Poder Ejecutivo; de manera que no veo qué peligro puede significar la permanencia de este artículo.

Es bien sabido que los gobiernos de Canadá y Australia trataron de colocar directamente sus sobrantes de cereales en Europa, y fracasaron porque no pudieron hacer las organizaciones suficientes. El Estado en este caso interpreta que iba a ser absolutamente necesario que haya instituciones dirigidas por el Estado argentino para que reemplacen a estos trusts y monopolios, que ha de perseguir la ley que estamos votando. Para mí son nuevos organismos completamente indispensables. No veo en qué puede estar la extorsión. Si esos sobrantes de 10 ó 12.000.000 de toneladas quedan en el país, es el desastre para todas las actividades de la producción; significaría la descapitalización y la cesantía. La descapitalización se produce cuando se trabaja por debajo del costo de producción; y la cesantía, señor presidente, de inmediato significa la quinta columna, que es algo terrible, porque eso forma el juicio público, la opinión pública, y ese enorme caudal de cesantes puede traer como consecuencia un cambio de gobierno. Si hay una descapitalización se echa a los obreros a la calle para perder menos, de manera que es una válvula de escape que se reserva el Poder Ejecutivo, pero bajo su directo e inmediato control.

Sr. Tascheret. — Pido la palabra.

Quiero recordar el espíritu con que ha sido presentado este proyecto. Los monopolios, trusts, cartels, tienen indiscutiblemente un fin ilícito e inhumano y por eso los estamos combatiendo. Yo no puedo comprender cómo es posible, entonces, que en los convenios, fusiones, o amalgamas, combinaciones y pactos que se hagan, sea posible separarse del concepto intrínseco de esta ley, que es el de declararlos ilícitos e inhumanos. A este objeto recuerdo las investigaciones durante la presidencia de Roosevelt en Estados Unidos de América, a cuya iniciativa se debió la creación de comisiones investigadoras de todas estas asociaciones o sociedades de comercio exterior, que indiscutiblemente habían provocado a la nación americana grandes perjuicios, tanto en la faz política como en la social, de los países vecinos y del exterior. Creo que, indiscutiblemente, en este país no

pueden realizarse pactos de esa naturaleza y no creo tampoco que la supresión de este artículo —compartiendo la opinión del señor senador Molinari— pueda dificultar todas las combinaciones o pactos que actualmente o en el futuro pueda realizar nuestra Nación.

Por esas razones creo que debe suprimirse el artículo 17 del proyecto de ley, por las consideraciones de orden moral expresadas por los señores senadores Ramella y Soler y por las que acabo de exponer.

Sr. Soler. — Pido la palabra.

Deseo contestar al señor senador por Salta. Le diré que esta discusión de la supresión del artículo 17 se está llevando al terreno del comercio exterior, el que no tiene nada que ver con este artículo. Con él y sin él el comercio exterior tendrá que seguir existiendo, y regulado, si es económico, por el Poder Ejecutivo de la Nación. Lo que queremos impedir es el privilegio que se da a los trusts, es lo que nosotros estamos combatiendo por inmoral. En este artículo no se han animado a poner la palabra *trusts*, la que se disfraza bajo la faz de *convenios, pactos, combinaciones, amalgamas o fusiones de capitales*. Se le ha buscado la vuelta para no usar aquella palabra, porque se la considera ilícita, inmoral e impropia.

Yo veo que con este artículo vamos a hacer que se pongan al margen de las sanciones punitivas de la ley, capitales que se asocian con fines ilícitos, y bastará que les dé un bill de indemnidad el Banco Central, para que pasen por lícitos dentro de nuestra República. El Banco Central puede equivocarse y dar ese bill a una conglomeración determinada de capitales. No nos oponemos a la asociación de capitales; lo que queremos es que esta ley les alcance en su faz punitiva desde el momento que se asocian con fines ilícitos, y no a aquellos que se asocian con fines lícitos para acrecentar el comercio exterior de la República, regulado en debida forma.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

Creo que en cierto modo está agotado el debate, pero insisto en lo que dije antes. El señor senador por Salta, doctor Bavio, me hace notar, con cierta amable ironía, que todos los que piden que se suprima el artículo se apoyan en mí, y los que piden que no se suprima, también se apoyan en mí. (Risas.)

La verdad del caso es ésta: que hay un acuerdo fundamental. Todos estamos de acuerdo en que hay que combatir la actividad ilícita de los trusts; todos estamos de acuerdo en que son inmorales las *combinaciones, amalgamas o cualquier otra fusión de capitales* en que quiera disfrazarse el trust. En lo que no estamos de acuerdo, es acerca de si este artículo responde

por su redacción al propósito que anima a toda la representación que en este momento se sienta en las bancas del Senado. Si yo hubiera tenido alguna duda respecto del propósito del artículo, aun cuando al tratarse el decreto ley propuse algunas modificaciones, sin tomar en cuenta que esto pudiera interpretarse en el sentido de que detrás de esta redacción pudiera esconderse una actividad monopolística —introduzco el término—, las dudas no han surgido en mi espíritu hasta este momento, respecto a que, detrás de este artículo, no habrá, no podrá haber actividades monopolísticas.

Yo me explico el justo temor de los señores senadores, cuya sensibilidad exquisita les hace ver al enemigo en todo momento. Evidentemente, el enemigo está en todas partes; podría ocultarse aun detrás de un artículo de esta naturaleza, si no se hubiese debatido con tanta amplitud, si no quedasen en la redacción de la ley estampadas las palabras que están demostrando categóricamente cuál es la finalidad que perseguimos al legislar en este punto y en esta materia.

Por otra parte, el artículo dice *Banco Central de la República Argentina*, y no Banco de la Nación.

Por la simplicidad de la ley, aun propuse que se suprimiese esta última parte, porque el Poder Ejecutivo es quien dispone, por supuesto, el mecanismo correspondiente para averiguar si hay detrás de la amalgama, combinación o convenio, una actividad ilícita. Si la hubiese, no puede ir el Poder Ejecutivo en detrimento de la ley, hacia el amparo de un acto que no es lícito.

Este debate ha iluminado bastante la materia. El Banco Central de la República Argentina es un banco que acaba de ser nacionalizado, y cuando discutamos la materia bancaria se comprenderá hasta qué punto valen estas palabras. Ahí no puede esconderse lo que, hasta ayer no más, se pudo esconder, y que se escondió, como lo demostraremos, porque el Banco Central, como se dijo antes, no era un Banco de la República; era un banco que, en función del capital, servía, no al país, sino al extranjero; que no amparaba nuestra economía, sino que la deprimía. Y ya veremos, cuando se haga el debate más adelante, hasta dónde vendrán las evidencias. Ahora, el Banco Central es un banco de la Nación; ya no hay intereses particulares que puedan menguar su acción ni torcer su espíritu; es imposible suponer que el Banco Central de la República Argentina sirva en función de monopolio a una combinación de capitales que caigan bajo las acciones de esta ley.

Claro que puede ocurrir que el presidente de la Nación delinca, que delinca los señores senadores; que los señores diputados delinca; que los jueces delinca. Mas tiene establecido

la Constitución el sistema legal y todo el procedimiento para penar como corresponde a quienes incurran en la comisión de esos delitos, sean quienes fuesen.

De modo que hay una extraordinaria garantía en esto que es ahora el informe del Banco Central de la República Argentina.

Un hecho concreto que quizá haya sido pasado por alto por los señores senadores, me obliga a decir ahora que, en previsión de cualquier accidente, el artículo se aclara todavía más en el sentido de que no habrá ninguna combinación de trusts.

El Banco de la Nación Argentina experimentó su transformación durante la época revolucionaria. Está entre nosotros el señor senador por Salta, doctor Durand, que ha sido uno de los más destacados dirigentes de ese banco, en función de director, en años pretéritos, y en estos años de la revolución. Y precisamente a su iniciativa, se debió que el Banco de la Nación instalase algunas sucursales en países extranjeros, porque el comercio exterior necesita métodos comerciales bancarios y movimiento de capitales que no se puede hacer a la manera que se hacía en otros tiempos.

Se está estudiando cómo instalar en la capital de Chile una institución bancaria, que dependa del Banco Central de este país, para poder establecer un convenio y amalgama de capitales a través de nuestras instituciones bancarias y del otro país, para echar las bases ciertas de una comercialización que nos permita aprovechar la materia prima chilena en función de la gran industria siderúrgica que el país necesita, si en realidad quiere salir del estado colonial que hasta en este momento ha vivido. ¿Cae esta combinación bajo la sanción de esta ley? Evidentemente, no.

Para mí el artículo, como dije, podría haber pasado en el sistema bancario, pero la verdad es que cubriendo, como cubre, estas actividades, si queda, no perjudica. Volvemos a aplicar este criterio, de que lo que abunda no daña. Ya lo hemos aplicado varias veces en lo que a esta ley se refiere, porque jurídicamente no perjudica. Lo ha demostrado muy bien el señor senador por Santa Fe: es una excepción esta actividad que pudiera creerse que tiene una finalidad monopolista, cuando no existe tal cosa, porque lo dice muy bien el artículo. Introduce lo correspondiente a la excepción, vale decir, que nunca ha de considerarse como pasible de pena a esta actividad ni podrá confundirse esta actividad con la trustificada en función de monopolio que la ley condena. Desde el punto de vista financiero, en el sentido de la mecánica del comercio internacional, son beneficiosas estas combinaciones. En este momento el país está realizando, como acabo de explicar, una que marcha en la vecina capital

de la República de Chile. De manera que evidentemente ni por el lado económico ni por el lado jurídico el artículo perjudica a la economía de la ley.

La única sombra de duda que podría haber en el espíritu, y que nos hace reaccionar instintivamente a todo esto, es la que con legítima pasión por el bien público han expresado los señores senadores que creen ver en esto la repetición de la ley Webb.

Yo he señalado que en el mecanismo de la ley americana había una ley combatiendo el trust dentro del país y una ley protegiéndolo fuera de los Estados Unidos. Ese conjunto de leyes se ha calificado como leyes *sin dientes*, porque allí no se hizo ninguna discriminación entre la economía de carácter público que nosotros hacemos y la economía de carácter privado, quedando librado el campo de la economía a la actividad monopolística, hasta que llegó el momento en que el monopolio ha desaparecido, según me ha asegurado no hace más de ocho días el excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos, señor Messersmith, en ese amable almuerzo que tuvimos en su compañía.

Si queda el artículo en la ley, ésta se refuerza con un artículo más. Si se suprime el artículo la ley no se debilitaría. Pero ante la posibilidad, repito, de que no haya un mecanismo ajustado de comercialización, y en la inteligencia de que este debate ha aclarado hasta lo profundo cuál es el pensamiento del Honorable Senado, podemos votar con tranquilidad. Los que votan por la afirmativa, saben que dotan de un instrumento a la protección del comercio exterior y a la economía que en este artículo va incluida. Los que voten en contra del artículo de acuerdo a su conciencia votan contra toda posibilidad de trustificación en función de monopolio, no importa cuál sea la forma en que el artículo sea redactado.

Respondo así a la amable duda interpretativa de mi colega. Los que voten por la afirmativa se apoyarán en lo que he dicho, y los que voten por la negativa también se apoyan en lo que he expresado.

Sr. Saadi. — Antes de someterse a votación este artículo, debo recordar a los señores senadores que en Estados Unidos existe la ley Webb-Pomerene...

Sr. Molinari. — La he citado.

Sr. Saadi. — ...destinada a organizar los trusts y cartels internacionales, para luego financiarlos con el régimen de los bancos de la Reserva Federal, lo que se efectuaba con la ley Edge.

Sr. Molinari. — He citado las dos leyes. Aquí levantamos un dique frente a la actividad trustificadora, en beneficio de la Nación, que va a abatir a los propios monopolizadores.

Sr. Amelotti. — Con la agravante de que el nuestro es un país agropecuario.

Sr. Molinari. — De acuerdo.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee:

Artículo 18 (que pasa a ser 17). — Esta ley de emergencia se declara de orden público y se suspende, durante el término de su vigencia, la aplicación de todas las disposiciones de otras leyes que se le opongan, y especialmente la 11.210, que por ésta se modifica.

Sr. Antille. — Queda sobrentendido que también las disposiciones del Código Penal quedan substituídas por esta ley.

Sr. Molinari. — Desde luego, porque siendo ley de emergencia y de orden público, modifica y substituye todo el régimen penal.

Sr. Antille. — ¿No se establece término para la vigencia de esta ley?

Sr. Molinari. — Por ahora, no.

Sr. Saadi. — Creo que no hace falta.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

Iba a hacer una observación al artículo en discusión, porque considero que esta ley no es de emergencia, sino una ley penal, con carácter permanente, que tendrá que durar mientras duren las tentativas de los trustificadores para ahogar la economía del país. Y tiene que ser ley fija y permanente como lo fué la ley 11.210, a la que ahora substituye y no suspende. A su vez, como ley permanente, puede ser substituída en cualquier momento por otra.

Creo, por consiguiente, que la redacción debería ser: *Esta ley se declara de orden público y deroga todas las disposiciones que se opongan a la misma.*

Sr. Molinari. — Muy bien.

Sr. Presidente. — Se va a leer en la forma propuesta.

Sr. Secretario ad hoc (Tascheret). — (Leyendo): «Artículo 18. — Esta ley se declara de orden público y deroga todas las disposiciones que se opongan a la misma.»

Sr. Presidente. — Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Molinari. — Pido la palabra.

En el proyecto de ley que yo había presentado, proponía que a continuación del artículo 17 del mismo decreto ley del Poder Ejecutivo, que estamos votando, se incluyese otro; pero como ese artículo que propuse ha sido substituído por una redacción más completa, en cuanto a la parte penal, y se agregó a un artículo anterior, de hecho quedó eliminado el que yo propuse. De manera que debe continuarse con la discusión de la ley, tal como lo propuso el Poder Ejecutivo, quedando el 17 bis suprimido.

Aparte de esto, el artículo 19 del decreto ley no tiene razón de ser ahora.

El artículo siguiente es de forma, señor presidente.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto.

Sr. Molinari. — Pido la palabra, para rogar al señor presidente que se comunique con toda urgencia esta sanción, para que el proyecto pueda ser tratado por la Cámara de Diputados en las sesiones de la semana entrante, si lo considera conveniente.

Sr. Presidente. — Así se hará, señor senador. Se va a pasar al orden del día.

9

INDICACION

Sr. Gómez del Junco. — Desearía hacer indicación para que en la sesión del miércoles se trate, con o sin despacho de comisión, el proyecto de ley sobre arrendamientos rurales.

Sr. Molinari. — Apoyado.

Sr. Presidente. — Se va a votar la indicación del señor senador por Córdoba.

—Se vota y resulta afirmativa.

10

PERMISO PARA ACEPTAR UNA CONDECORACION EXTRANJERA

—Se lee:

Despacho de la comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales ha considerado la solicitud presentada por el señor senador Alejandro Mathus Hoyos, para que se le permita aceptar la condecoración «Al Mérito» que le ha otorgado el gobierno de la República de Chile; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Acuérdase al señor senador doctor Alejandro Mathus Hoyos el permiso que solicita para aceptar la condecoración «Al Mérito», en la categoría de Gran Oficial, que le ha conferido el gobierno de la República de Chile.

Art. 2º — Comuníquese, etc.

Sala de la comisión, julio 18 de 1916.

Armando G. Antille. — Diego Luis Molinari. — Vicente Leonides Saadi.